

Los refugiados del conservacionismo

Cuando la conservación implica desterrar a la gente

Mark Dowie

No es ningún secreto que millones de pueblos indígenas de todo el mundo han sido expulsados de sus tierras para dar lugar a las grandes extracciones de petróleo y minerales, las grandes explotaciones madereras y las grandes extensiones agroindustriales. Pero pocos se dan cuenta que algo similar ha estado ocurriendo por una causa mucho más noble: la conservación de tierras y de la vida silvestre. No son sólo las empresas las que tienen mala fama entre las comunidades indígenas, sino también, y cada vez más, algunas organizaciones no gubernamentales internacionales.

La mayoría de las mañanas, una niebla a ras del suelo envuelve los valles profundos y remotos del suroeste de Uganda, mientras las aves que se encuentran solamente en esta pequeña esquina del continente elevan sus cantos en coro y los grandes simios beben el agua de claros arroyos. Los días en el denso bosque de montaña son calmos y brumosos. Las noches son una exaltación de insectos y de aullidos de primates. Durante miles de años el pueblo Batwa creció en este escenario de sonidos, en una armonía tan estrecha con el bosque que los biólogos de principios del siglo XX que estudiaron la flora y la fauna de la región apenas si notaron su existencia. Como señaló un naturalista, eran “parte de la fauna”.

En la década de 1930, los conservacionistas internacionales convencieron a los dirigentes de Uganda de que esta zona estaba amenazada por intereses madereros, mineros y otras actividades extractivas. En respuesta a eso se crearon tres reservas de bosques: Mgahinga, Echuya y Bwindi, todas ellas superpuestas con el territorio ancestral de los Batwa. Durante sesenta años esas reservas existieron tan solo en el papel, pero eso mantuvo alejados a los extractivistas. Y los Batwa se quedaron, viviendo tal como lo habían hecho durante varias generaciones, en reciprocidad con la biota diversa que atrajo por primera vez a los conservacionistas a la región.

Pero cuando las reservas fueron designadas formalmente como parques nacionales en 1991 y para

administrarlas se creó una burocracia financiada por el FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o GEF por su sigla en inglés), del Banco Mundial, circuló el rumor de que los Batwa estaban cazando y comiendo gorilas de espalda plateada. Por ese entonces, este tipo de gorila era reconocido ampliamente como una especie amenazada y también, cada vez más, era objeto de atracción para los ecoturistas de Europa y Estados Unidos. Los Batwa reconocieron que los gorilas estaban siendo perturbados e incluso cazados, pero por los Bahutu, los Batutsi, los Bantu y otras tribus que invadieron el bosque desde aldeas externas. Los Batwa, que sentían una fuerte afinidad con los grandes simios, negaron categóricamente haberlos matado. A pesar de ello, y debido a la presión ejercida por los conservacionistas tradicionales de Occidente, que estaban convencidos de que la vida silvestre y las comunidades humanas eran incompatibles, los Batwa fueron expulsados a la fuerza de su territorio.

Esos bosques son tan densos que cuando salieron por primera vez de ellos, los Batwa perdieron la perspectiva. Algunos incluso se daban de bruces con los vehículos en movimiento. Ahora están viviendo en lastimosos campos de ocupantes precarios en el perímetro de los parques, sin agua corriente o saneamiento. En una generación más, su cultura del bosque –cantos, rituales, tradiciones, historias– se perderá. No es ningún secreto que millones de pueblos indígenas de todo el mundo han sido expulsados de sus tierras



para dar lugar a las grandes extracciones de petróleo y minerales, las grandes explotaciones madereras y las grandes extensiones agroindustriales. Pero pocos se dan cuenta que lo mismo ha estado ocurriendo por una causa mucho más noble: la conservación de tierras y de la vida silvestre. Actualmente, en la lista de las instituciones destructoras de la cultura, denunciadas por líderes tribales de casi todos los continentes, figuran no solamente Shell, Texaco, Freeport y Bechtel, sino también, increíblemente, nombres como Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund (WWF) y la Sociedad para la Conservación de la Naturaleza (Wildlife Conservation Society, WCS). Hasta la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), más sensible a los aspectos culturales, podría obtener una mención.

A principios de 2004 se convocó a una reunión de las Naciones Unidas en Nueva York. Era el noveno año consecutivo en que se impulsaba la aprobación de una resolución para la protección de los derechos territoriales y humanos de los pueblos indígenas. La declaración preliminar de la ONU establece: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento expresado libremente y con pleno conocimiento de los pueblos indígenas interesados y previo acuerdo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, con la posibilidad de regreso”. Durante la reunión, una delegada indígena que no se identificó, se puso de pie para declarar que mientras las industrias extractivas seguían constituyendo una amenaza grave para su bienestar y su integridad cultural, su enemigo nuevo y mayor era la “conservación”.

En esa misma primavera, poco después, en una reunión del Foro Internacional de Mapeamiento Indígena realizada en Vancouver, British Columbia, los doscientos delegados firmaron una declaración que establecía que “las actividades de las organizaciones de conservación representan actualmente la mayor amenaza individual a la integridad de las tierras indígenas. Esas estocadas elocuentes conmocionaron a la comunidad conservacio-

nista internacional, al igual que un torrente de artículos y estudios críticos subsiguientes, dos de ellos conducidos por la Fundación Ford, que reclamaban a los grandes grupos conservacionistas que se hicieran cargo de su histórico maltrato a los pueblos indígenas.

“Somos enemigos del conservacionismo”, declaró el líder Maasai Martin Saning’o, de pie ante una sesión del Congreso Mundial de Conservación, en noviembre de 2004, auspiciado por la UICN en Bangkok, Tailandia. El Maasai nómada, quien en los últimos treinta años perdió la mayor parte de sus áreas de pastura por proyectos de conservación aplicados a lo largo de la zona oriental de África, nunca se había sentido de esa manera. Es más, Saning’o recordó a su audiencia que “... fuimos los conservacionistas originales”. La sala guardó silencio mientras él explicaba con calma cómo los criadores de ganado nómades y sedentarios han protegido tradicionalmente sus zonas de pastoreo: “Nuestras formas de cultivo polinizaron diversas especies de semillas y mantuvieron corredores entre los ecosistemas”. Luego trató de entender la extraña versión de conservación de la tierra que ha empobrecido a los integrantes de su pueblo, más de cien mil de los cuales han sido desterrados del sur de Kenia y de las Planicies del Serengeti de Tanzania. Al igual que los Batwa, los Maasai no han sido indemnizados con justicia. Su cultura se está disolviendo y viven en la pobreza.

“No queremos ser como ustedes”, dijo Saning’o a toda una sala de conmocionados rostros blancos. “Queremos que ustedes sean como nosotros. Estamos aquí para cambiar su manera de pensar. Ustedes no pueden lograr la conservación sin nosotros”. Aunque tal vez no se haya dado cuenta, Saning’o estaba hablando a un creciente movimiento mundial de pueblos indígenas que se ven a sí mismos como refugiados del conservacionismo. A diferencia de los refugiados ecológicos —aquellos obligados a abandonar sus tierras como consecuencia del calor insportable, la sequía, la desertificación, las inundaciones, las enfermedades y otras consecuencias del caos climático—, los refugiados del conservacionismo son expulsados de sus tierras en contra de su voluntad, ya sea por la fuerza o a través de una variedad de medidas menos coercitivas. Los métodos más suaves, más benignos, son llamados a veces “expulsión suave” o “reasentamiento voluntario”, si bien esto último es discutible. Ya se trate de una reubicación suave o agresiva, la reclamación principal que se escucha en las aldeas improvisadas que bordean los parques y en las reuniones como el Congreso Mundial de la Conservación en Bangkok, es que a menudo ocurre con la aprobación tácita o la desidia apacible de una de las grandes cinco organizaciones no gubernamentales internacionales conservacionistas, o, como han sido apodadas por los líderes indígenas, las BINGO (por el

inglés, “big international nongovernmental organisations”). Con frecuencia los pueblos indígenas son dejados completamente al margen del proceso.

Esta línea del conservacionismo que pone los derechos de la naturaleza por encima de los derechos de la gente despertó mi curiosidad. El otoño pasado me dispuse a enfrentar cara a cara el tema. Visité a miembros de tribus de los tres continentes que estaban luchando denodadamente con las consecuencias del conservacionismo occidental y encontré una alarmante similitud entre las historias que escuché.

Khon Noi, matriarca de una remota aldea de la montaña, se acurruca al lado de una cocina al aire libre, vestida con su traje suelto, de brillantes colores, que la identifica como una Karen, la más populosa de las seis tribus localizadas en las extensiones exuberantes, montañosas, del norte remoto de Tailandia. Su aldea de sesenta y seis familias ha vivido en el mismo valle por más de 200 años. Khon Noi mastica betel, escupiendo su brillante jugo rojo al fuego, y habla suavemente a través de sus dientes negros. Me dice que puedo utilizar su nombre en tanto no identifique su aldea.

“El gobierno no tiene idea de quién soy”, dice. “La única persona en la aldea que conocen por su nombre es el ‘jefe’ que ellos nombraron para representarnos en las negociaciones con el gobierno. Estuvieron aquí la semana pasada, con uniformes militares, para decirnos que no podíamos practicar más la agricultura de rotación en este valle. Si supieran que alguien estuvo hablando mal de ellos, volverían y nos sacarían de aquí”.

En un reciente estallido de entusiasmo ambiental estimulado por generosos ofrecimientos financieros del FMAM, el gobierno tailandés creó parques nacionales tan rápido como el Departamento Forestal Real pudo mapearlos. Diez años atrás apenas si se encontraba un parque en Tailandia, y debido a que esos pocos que existían eran “parques de papel” no registrados, pocos tailandeses sabían siquiera que estaban ahí. Ahora hay 114 parques terrestres y 24 parques marítimos en el mapa. Casi 25.000 kilómetros cuadrados, la mayoría de los cuales están ocupados por tribus de la montaña y tribus de pescadores, son administrados actualmente por el departamento forestal como áreas protegidas.

“Un día, de la nada, aparecieron unos hombres de uniforme enseñando sus armas”, recuerda Kohn Noi, “y diciéndonos que ahora estábamos viviendo en un parque nacional. Esa fue la primera vez que supimos del parque. Nos confiscaron nuestras armas ... no más caza de animales con trampa o con lazo, y no más agricultura de ‘roza y quema’. Así es como llaman a nuestra agricultura. Nosotros la llamamos rotación de cultivos y lo hemos estado haciendo en este valle por más de doscientos años. Pronto nos veremos obligados

a vender arroz para comprar las verduras y legumbres que ya no nos permiten cultivar aquí. Podemos vivir sin la caza, pues criamos gallinas, cerdos y búfalos. Pero la agricultura de rotación es nuestra forma de vida.

Una semana antes de nuestra charla, y a poca distancia en avión al sur de la aldea de Noi, 6.000 conservacionistas asistían al Congreso Mundial de Conservación en Bangkok. En esa conferencia y en otros ámbitos, los grandes grupos conservacionistas negaron ser parte de las expulsiones. Mientras, produjeron gran cantidad de material de promoción que hablaba de su estrecha relación con los pueblos indígenas. “Reconocemos que los pueblos indígenas tienen quizás la comprensión más profunda de los recursos vivos de la Tierra”, dice el presidente y director de Conservation International, Peter Seligman. Y añade que, “creemos firmemente que los pueblos indígenas deben tener la posesión, el control y la titulación de sus tierras”. Esos mensajes están cuidadosamente dirigidos a los principales financiadores del conservacionismo, que, en respuesta a los informes mencionados de la Fundación Ford y otra prensa, se han sensibilizado cada vez más con los pueblos indígenas y sus luchas por la supervivencia de su cultura.

El apoyo financiero para la conservación internacional se ha ampliado en los últimos años mucho más allá de las fundaciones individuales y familiares que dieron inicio al movimiento, para incluir grandes fundaciones como la Ford, MacArthur y Gordon y Betty Moore, así como el Banco Mundial, su FMAM, otros gobiernos, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), una serie de bancos bilaterales y multilaterales, y empresas transnacionales. Durante la década de 1990 la USAID sola inyectó casi 300 millones de dólares al movimiento conservacionista internacional, que llegó a considerar un auxiliar vital para la prosperidad económica. Las cinco mayores organizaciones conservacionistas, entre ellas Conservation International, TNC y WWF, absorbieron más del 70% de ese gasto. Las comunidades indígenas no recibieron nada. La Fundación Moore hizo un compromiso singular de casi 280 millones en diez años, la mayor donación ambiental de la historia, a tan solo una organización –Conservation International. Y en los últimos años todas las BINGO se han convertido cada vez más en empresas, tanto por su orientación como por su afiliación. The Nature Conservancy se jacta ahora de tener casi dos mil empresas comerciales que lo patrocinan, mientras que Conservation International ha recibido casi 9 millones de dólares de sus doscientos cincuenta “socios” empresariales.

Con ese tipo de palanca financiera y política, así como subdivisiones en casi todos los países del mundo, millones de miembros leales y presupuestos de nueve cifras, CI, WWF y TNC han ejercido una enorme presión

a escala mundial para aumentar el número de las llamadas áreas protegidas –parques, reservas, santuarios de vida silvestre y corredores creados para preservar la diversidad biológica. En 1962 había alrededor de 1.000 áreas protegidas oficiales en todo el mundo. Actualmente hay 108.000, y cada día se agregan más. La superficie total de tierra en régimen de protección para la conservación en todo el mundo se ha duplicado desde 1990, cuando la Comisión Mundial de Parques estableció el objetivo de proteger el 10 por ciento de la superficie del planeta. Ese objetivo ha sido superado ya que actualmente está protegido más del 12% de toda la superficie terrestre, un total de unos 30,43 millones de kilómetros cuadrados. Se trata de una superficie mayor que el macizo territorial del continente africano.

Durante la década de 1990, la nación africana de Chad aumentó la cantidad de tierras nacionales en régimen de protección de 0,1 a 9,1%. Toda ese territorio había estado previamente habitado por quienes ahora se estima ascienden a 600.000 refugiados del conservacionismo. Ningún otro país además de India, que oficialmente admite la cifra de 1,6 millón, contabiliza siquiera esta nueva clase de refugiados en aumento. Las estimaciones mundiales ofrecidas por la ONU, la UICN y unos pocos antropólogos van de 5 a decenas de millones. Charles Geisler, sociólogo de la Universidad de Cornell, quien ha estudiado el tema de los desplazamientos en África, tiene la certeza de que la cifra solamente en ese continente supera los 14 millones.

La verdadera cifra mundial, de conocerse alguna vez, dependería de la semántica de palabras tales como “desalojo”, “desplazamiento” y “refugiado”, acerca de las cuales las facciones vinculadas a los diversos aspectos del tema debaten interminablemente. El mayor argumento es que existen refugiados del conservacionismo en todos los continentes excepto la Antártida, y en la mayoría de los casos sus condiciones de vida son mucho más difíciles que las que tenían antes, impedidos ahora de ingresar a las tierras en las que crecieron durante siglos y hasta miles de años.

John Muir, precursor del movimiento conservacionista en los Estados Unidos, argumentó que habría que aislar la “vida silvestre” y dejarla sin habitantes, para satisfacer la necesidad humana urbana de recreación y renovación espiritual. Fue un sentimiento que se convirtió en política nacional con la aprobación de la Ley de Vida Silvestre de 1964, que definió la vida silvestre como un lugar “donde el hombre mismo es un visitante que no permanece”. No deberíamos sorprendernos de encontrar fuertes residuos de esos sentimientos entre los grupos conservacionistas tradicionales. La preferencia por la naturaleza “virgen” ha permanecido en un movimiento que ha tendido a valorar a toda la naturaleza con excepción de la naturaleza humana, y

se ha negado a reconocer la dimensión salvaje positiva de los seres humanos.

Hasta la fecha continúan las expulsiones en todo el mundo. El gobierno indio, que desalojó a 100.000 Adivasis (población rural) en Assam entre abril y julio de 2002, estima que en la próxima década desplazará a 2 o 3 millones más. La política se debe en gran medida a una ley de 1993 propuesta por WWF, que exigía que el gobierno aumentara las áreas protegidas en un 8%, principalmente para proteger el hábitat del tigre. Una amenaza más inmediata se refiere a la inminente expulsión de varias comunidades mayas de la región de Montes Azules en Chiapas, México, un proceso que comenzó a mediados de la década de 1970 con la intención de preservar el bosque tropical virgen, lo cual podría fácilmente hacer estallar una guerra civil. Conservation International está muy involucrado en esa controversia, al igual que una serie de industrias extractivas.

La población tribal, que tiende a pensar y planificar en términos de generaciones, y no de semanas, meses y años, todavía espera que le presten la consideración prometida. Por supuesto, la declaración preliminar de la ONU es el premio, porque debe ser ratificada por numerosas naciones. La declaración no ha sido aprobada hasta ahora, principalmente porque dirigentes poderosos como Tony Blair, del Reino Unido, y George Bush, de los Estados Unidos, amenazan con vetarla, con el argumento de que no hay y nunca debería haber una cosa como los derechos humanos colectivos.

Lamentablemente, los grupos de derechos humanos y los conservacionistas internacionales se enfrentan sobre la cuestión del desplazamiento, cada uno de los bandos culpando al otro de la crisis particular que perciben. Los biólogos conservacionistas argumentan que al permitir que las poblaciones nativas realicen actividades agrícolas, cacen y hagan recolección en las áreas protegidas, los antropólogos, los preservacionistas culturales y otros grupos que apoyan los derechos indígenas se vuelven cómplices de la pérdida de diversidad biológica. Algunos, como el presidente de Wildlife Conservation Society (WCS), Steven Sanderson, dice abiertamente que cree que todo el programa conservacionista mundial ha sido “secuestrado” por quienes defienden a los pueblos indígenas, colocando la vida silvestre y la biodiversidad en peligro. “Los pueblos de los bosques y sus representantes tal vez hablen por el bosque”, dijo Sanderson, “Tal vez hablen por su versión del bosque; pero no hablan por el bosque que nosotros queremos conservar”. WCS, originalmente la Sociedad Zoológica de Nueva York, es una BINGO de menores dimensiones y estatura que TNC, CI y similares, pero es más insistente que sus colegas en el argumento de que los derechos territoriales indígenas, si bien son una cuestión social válida, no atañen a los conservacionistas.



Las soluciones de mercado presentadas por los grupos de derechos humanos, que pueden haber sido aplicadas con la mejor de las intenciones sociales y ecológicas, comparten un resultado lamentable, apenas discernible por detrás de una hábil promoción que actúa como pantalla de humo. En casi todos los casos los pueblos indígenas son trasladados a la economía monetaria sin tener los medios para participar en ella plenamente. Quedan permanentemente contratados como policía montada de parques (nunca como guardaparques), porteros, mozos, segadores o, si logran aprender un idioma europeo, guías ecoturísticos. Dentro de este modelo, la “conservación” se acerca aún más al “desarrollo”, mientras las comunidades nativas se asimilan dentro de los estratos más bajos de las culturas nacionales.

No debería sorprendernos, pues, que los pueblos tribales consideren a los conservacionistas como otros colonizadores –una extensión de las fuerzas letales de la hegemonía económica y cultural. Sociedades enteras como los Batwa, los Maasai, los Ashaninka de Perú, los Gwi y Gana de Botswana, los Karen y Hmong del sudeste de Asia, y los Huaorani de Ecuador estén siendo transformados de comunidades independientes y autosuficientes en comunidades pobres y profundamente dependientes.

Cuando el otoño pasado viajé por toda Mesoamérica y la cuenca andino amazónica visitando a miembros del personal de CI, TNC, WCS Y WWF, buscaba señales de que se vislumbraba algún despertar. El personal de campo con el que me entrevisté era totalmente consciente de que el espíritu de exclusión sobrevive en las oficinas centrales de sus organizaciones, junto con un

prejuicio sutil pero real contra la sabiduría indígena “no científica”. Dan Campbell, director de TNC en Belize, admitió que “Tenemos una organización que a veces intenta emplear modelos que no encajan en la cultura de las naciones con las que trabajamos”. Y Joy Grant, de la misma oficina, declaró que como consecuencia de un prolongado desacuerdo con los pueblos indígenas de Belice, la población local “es ahora la clave para todo lo que hacemos”.

“Somos arrogantes”, fue la confesión de una ejecutiva de CI que trabaja en América del Sur, quien me pidió que no la identificara. Me conmovió que lo admitiera, hasta que continuó dando a entender que éste era apenas un defecto menor de carácter. En realidad, la soberbia fue citada por casi todos los cerca de cien líderes indígenas con los que me entrevisté, como un impedimento importante para construir canales de comunicación con las grandes organizaciones conservacionistas.

Si las observaciones de campo y los sentimientos de los trabajadores de campo se filtraran en las oficinas centrales de CI y de las otras BINGO, podría haber un final feliz para esta historia. Existen modelos de trabajo positivos de conservación socialmente sensible en todos los continentes, especialmente en Australia, Bolivia, Nepal y Canadá, donde la legislación nacional que protege los derechos territoriales indígenas no deja a los conservacionistas foráneos otra opción que la de unir sus manos con las de las comunidades indígenas y elaborar formas creativas para proteger el hábitat silvestre y sostener la biodiversidad, permitiendo a la vez que los ciudadanos indígenas habiten sus asentamientos tradicionales.

En la mayoría de esos casos es la población nativa la que inicia la creación de una reserva, que seguramente es denominada un “área indígena protegida” o un “área de conservación comunitaria”. Las áreas indígenas protegidas son una invención de los aborígenes australianos, muchos de los cuales han recuperado la posesión de sus tierras y la autonomía territorial en el marco de nuevos tratados con el gobierno nacional. Las áreas de conservación comunitaria están apareciendo en todo el mundo, desde las aldeas pescadoras de Laos, junto al Río Mekong, hasta el bosque Mataven en Colombia, donde seis tribus indígenas viven en 152 aldeas, bordeando una reserva ecológicamente intacta de 16.188 kilómetros cuadrados.

Los Kayapo, una nación de indios amazónicos con los cuales el gobierno brasileño y CI han formado un proyecto de conservación cooperativo, es otro ejemplo. Los líderes Kayapo, reconocidos por su militancia, se negaron rotundamente a ser tratados tan solo como otra parte interesada de un acuerdo a dos puntas entre un gobierno nacional y una ONG conservacionista, como

suele ocurrir con los planes de gestión cooperativa. En todas las negociaciones insistieron en ser un actor en igualdad de condiciones, con derechos iguales y soberanía territorial. Como resultado se creó el Parque Nacional Xingu, el primer parque del continente en posesión de los indígenas, para proteger las formas de vida de los Kayapo y otros grupos indígenas amazónicos que están decididos a permanecer dentro de los límites del parque.

En numerosos casos, una vez que se establece un área de conservación comunitaria y se garantizan los derechos territoriales, la comunidad fundadora invita a una BINGO a enviar a sus ecologistas y biólogos para compartir la tarea de proteger la biodiversidad combinando la metodología científica occidental con el conocimiento ecológico indígena. Y en ocasiones pedirán ayuda para negociar con gobiernos poco dispuestos. Por ejemplo, el pueblo Guaraní Izocéños, que vive en Bolivia, invitó a la organización Wildlife Conservation Society a mediar en un acuerdo de co-administración con su gobierno, que hoy día permite a la tribu administrar y tener la posesión de parte del nuevo Parque Nacional de Kaa-Iya del Gran Chaco.

No obstante, tal vez no haya que poner demasiadas esperanzas en unos pocos modelos exitosos de co-administración. La insaciable codicia empresarial por energía, madera, medicinas y metales estratégicos sigue siendo una amenaza considerable para las comunidades indígenas. Sin duda, una amenaza mayor que el conservacionismo. Pero las fronteras entre ambas se están borrando. Especialmente problemático es el hecho de que las organizaciones conservacionistas internacionales siguen trabajando confortablemente en sus sedes con algunos de los extractivistas de recursos mundiales más agresivos, como las empresas Boise Cascade, Chevron-Texaco, Mitsubishi, Conoco-Phillips, International Paper, Rio Tinto Mining, Shell y Weyerhaeuser, todas ellas miembros de una entidad creada por CI, denominada el Centro de Liderazgo Ambiental para Empresas. Por supuesto, si las BINGO fueran a renunciar a sus socios empresariales perderían millones de dólares en ingresos y acceso al poder mundial, sin lo cual ellos creen sinceramente que no podrían ser efectivos. Y hay algunos biólogos conservacionistas respetados e influyentes que todavía apoyan férreamente la idea de una conservación vertical, centralizada y "amurallada". John Terborgh, de la Universidad Duke, por ejemplo, cree que los proyectos co-administrados y las áreas de conservación comunitaria son un error enorme. "Considero que un parque tendría que ser un parque y no debería haber gente que lo habitara", declara. Su argumento se basa en tres décadas de investigación en el Parque Nacional del Manu, en Perú, donde los

indígenas Machiguenga pescan y cazan animales con armas tradicionales. A Terborgh le preocupa que comprarán los botes a motor, rifles y sierras que usan los otros indígenas fuera del parque, y que la biodiversidad sufrirá. Luego está el paleontólogo Richard Leakey, quien en el Congreso Mundial de Parques de 2003, realizado en Sudáfrica, desencadenó una andanada de protestas cuando negó la existencia misma de los pueblos indígenas en Kenia, su tierra ancestral, y argumentó que "el interés mundial por la biodiversidad puede en ocasiones estar por encima de los derechos de la población local".

Aún así, muchos conservacionistas han comenzado a darse cuenta de que la mayoría de las áreas que procuraban proteger son ricas en biodiversidad precisamente porque quienes vivían allí llegaron a comprender el valor y los mecanismos de la diversidad biológica. Algunos incluso admitirán que condenar a 10 millones o más de personas a una vida de pobreza y desposeimiento ha sido un error enorme –no solamente un error desde el punto de vista moral, social, filosófico y económico sino también ecológico. Otros han aprendido por la experiencia que los parques nacionales y las áreas protegidas rodeadas de gente indignada y hambrienta, que se define a sí misma como "enemiga de la conservación", generalmente están condenados al fracaso.

Más y más conservacionistas parecen estar preguntándose cómo es que, después de aislar una extensión de tierra "protegida" del tamaño de África, la diversidad biológica mundial continúa decayendo. Debe haber algo terriblemente equivocado con este plan –especialmente después que la Convención de Diversidad Biológica documentó el pasmoso hecho de que en África, donde se han creado tantos parques y reservas y donde los desalojos de indígenas tienen sus mayores índices, el 90% de la biodiversidad está fuera de las áreas protegidas. Si deseamos preservar la biodiversidad en las extensiones remotas del planeta, lugares que a menudo todavía están ocupados por pueblos indígenas que viven de una manera ecológicamente sustentable, la historia nos enseña que lo más torpe que podemos hacer es expulsarlos de allí.

Mark Dowie enseña ciencia en la Universidad de California, Escuela de Graduación en Periodismo de Berkeley. Fue editor y redactor de la revista Mother Jones y editor general de InterNation, un consorcio transnacional de prensa de Nueva York. Es autor de cuatro libros, entre ellos "Losing Ground: American Environmentalism at the Close of the Twentieth Century," (1995, MIT Press), que fue nominado para un Premio Pulitzer. Este artículo fue publicado por primera vez en la revista Orion, www.oriononline.org ●

Los servicios ambientales como estrategia de desplazamiento

En México los servicios ambientales han resultado ser la nueva estrategia para desplazar a las comunidades campesinas de sus territorios. Desde las nuevas “caras” de la privatización del agua y la contaminación transgénica del maíz a la imposición de monocultivos forestales de especies exóticas, los “servicios ambientales” no hacen otra cosa que ocultar “una estrategia más del capital para expulsar a la gente de las comunidades indígenas” según afirma Aldo González. Biodiversidad entrevistó al indígena mexicano de Oaxaca, quien habló del agua, la tierra y las semillas así como de las prácticas tradicionales de indígenas y campesinos, que siguen conformando una fuerte resistencia a la mercantilización de los bienes comunes.

*Biodiversidad
Carlos Santos*

—¿Cuál es la situación actual con respecto a la privatización del agua en las sierras de Guerrero en Oaxaca?

—Inicialmente nos pidieron el apoyo los compañeros de una comunidad que se llama San Antonino, Castillo Velasco, en el distrito de Ococlán. Ellos querían que los acompañáramos para darles alguna información sobre la problemática del agua en otros ámbitos, porque en julio de 2005 les empezaron a llegar algunas cartas de la Comisión Nacional del Agua en las que les pedían que fueran a la a pagar el consumo excesivo que hacían de agua con la concesión que les dieron hace 10 años, aproximadamente.

Los campesinos se extrañaron porque cuando les dieron las concesiones no les dijeron que tenían que pagar el agua. Cuando a preguntar en la Comisión Nacional del Agua nos dijeron que nuestra concesión era, por ejemplo, por un cuarto de hectárea, pero como nosotros regamos un cuarto de hectárea más algunas zonas aledañas, del mismo pozo, estamos utilizando para regar más de un cuarto de hectárea. La Comisión se dio cuenta de esto, según nos informaron, porque revisaron los recibos de la Compañía Federal de Electricidad, entonces hizo una multiplicación del consumo de electricidad por hora por la capacidad de extracción de la bomba y eso da determinado volumen de metros cúbicos. Entonces, de manera indirecta se dio cuenta

que les estaban extrayendo mayor cantidad de agua que la que habían autorizado en la concesión.

Ese es un problema. La gente dice no estar dispuesta a pagar el agua, eso porque hay muchos factores atrás. Hace mucho tiempo estos lugares eran muy húmedos, incluso había comunidades que reciben el nombre de “La ciénega”, hoy solamente queda el nombre, porque ya no hay agua, ya no es una ciénega. Y esto es así porque a finales de los años 70 la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de aquel entonces inició un programa para decirles a los campesinos de esas zonas que sus tierras estaban anegadas y que necesitaban hacer canales para extraer el agua. Y lo que hicieron fue abrir canales para desecar esas tierras y hoy el nivel del manto freático ha bajado enormemente. Ellos nos dicen: “hace cincuenta años el agua que precisábamos para regar nuestras hortalizas la sacábamos con un cántaro de los manantiales o hacíamos un hoyo en la ciénega y salía el agua”. Hace treinta años los pozos eran de 6 metros. Ahora son de entre 25 metros hasta 40 metros de profundidad. Ha habido una pérdida de los mantos freáticos enorme. El gobierno de alguna forma provocó esta situación, porque ellos no sabían que iban a orientar el agua de las tierras, de manera irresponsable hicieron esos canales para desecar las tierras.

No sólo hicieron los canales en pequeños arroyos, sino que hay un río que atraviesa prácticamente todo el territorio de Oaxaca, al Norte —el río Salado— y en la



parte central y hacia el Sur –donde se llama río Atoyac–. Este río en ocasiones inundaba la Ciudad de Oaxaca o las colonias periféricas, entonces se vio como un problema y lo que se hizo fue profundizar el cauce, lo que hace que ahora en lugar de un río sea un canal, al sacar el agua por el canal se está desecando las tierras. Los campesinos agregan “cuando hicimos los pozos los hicimos con nuestros propios recursos el gobierno federal nunca nos apoyó con recursos económicos para que hiciéramos una inversión de esa naturaleza”. Por ejemplo, hay un subsidio que se da básicamente a los productores de maíz y frijol que es el Procampo y ellos plantean “nosotros no recibimos el Procampo porque no sembramos maíz ni frijol, sembramos hortalizas. Y como las hortalizas no están subsidiadas, nosotros en nuestra comunidad no recibimos ningún subsidio. Somos los que hemos hecho la inversión, no hemos recibido nunca apoyo gubernamental y hoy vienen a decirnos que les debemos el agua”.

Por otro lado hay otra situación en algunas comunidades donde se están venciendo las concesiones. Las concesiones las otorgaron hace aproximadamente unos diez años, ahorita se están venciendo y ellos tienen que renovar las concesiones para poder seguir extrayendo el agua. Si no renuevan esas concesiones la Compañía Federal de Electricidad –que es la que les suministra energía eléctrica para que activen sus bombas– no les puede dar el servicio o les puede quitar el servicio por falta de la concesión. Entonces ellos necesitan la concesión para seguir sacando agua del subsuelo. Y la Comisión Nacional de Agua les dice “si quieres que te renueve tu concesión tienes que colocar un medidor en tu pozo de agua, para que sepamos con certeza plena cuántos metros cúbicos de agua estás extrayendo”. Y la gente dice: “nosotros no estamos dispuestos a poner contadores en nuestros pozos de agua porque el agua no nos la da el gobierno”.

Han hecho muchas acciones para que el agua se vaya de nuestras tierras y ahora nos quieren cobrar el

agua. En la región de la parte Sur del Valle de Oaxaca, inicialmente fue la comunidad de San Antonino la que inició esta lucha, luego se elevó a ocho el número de comunidades que estaban en esta situación, y ahora son catorce comunidades.

En estos momentos están haciendo más difusión de la problemática que tienen con el agua para invitar a campesinos de otras zonas a que se sumen a sus emprendimientos. Hay gente que está deseosa de que se haga una movilización de protesta para que el gobierno escuche y solucione el problema. Nosotros vemos que hay una Ley de Agua, en México, que prácticamente está convirtiendo en delincuentes a los campesinos. Desgraciadamente en el caso del Estado de Oaxaca estamos viendo que cada vez que hay una movilización, hay policías, hay represión, entonces les hemos recomendado a los campesinos que antes de hacer una movilización tienen que hacer lo que están haciendo ahora: convocar a más gente para que en el momento que sea necesario movilizarse no sea sólo una comunidad o un pequeño grupo de campesinos movilizándose, sino que sea un gran movimiento de toda esa comunidad del Valle de Oaxaca que pueda iniciar toda la protesta y difusión de esta problemática. Ellos dicen “ya nos dimos cuenta que el problema no los puso la ley, entonces ahora otra de nuestras demandas es que se cambie esa Ley Nacional de Agua”.

–¿Como ha sido el avance de este sistema de “concesiones” de agua?

–Lo que hemos visto en relación con el agua y la tierra es que, por un lado, están concesionando el agua, ya sea de pozos, de ríos o de arroyos, nadie puede sacar el agua sin autorización de la Comisión Nacional del Agua, y esta comisión puede autorizar la concesión a campesinos que viven en esos lugares o a particulares, aunque no vivan en ese lugar. Aunque no sean dueños de un pedazo de tierra que esté alrededor del río.

Hay empresas mineras que no son dueñas del suelo del que están haciendo la extracción del subsuelo y necesitan agua para sus actividades y se la dan, en detrimento de las comunidades locales. Hay un río, por ejemplo, que es el río Grande, que cuando baja de la montaña tiene un caudal importante, cuando llega a la altura de la mina esa agua es utilizada para las actividades mineras y después de las instalaciones de la minera el cauce del río disminuye considerablemente. Porque la mina tiene muchas filtraciones, entonces se está escapando el agua superficial a través de las filtraciones de la mina. La gente en estas comunidades también están muy descontenta, porque la minera sigue profundizando sus túneles y uno de esos túneles está

llegando a la parte de abajo de los manantiales de agua que surten a la comunidad. Si la minera llega con sus túneles abajo de nuestro manantial, el manantial se va a secar. La minera dice que no, pero las comunidades saben por experiencia de otros lugares donde anteriormente había manantiales y actualmente ya no existen porque se filtraron a los túneles de la mina.

Hay casos como estos que se están dando en México, en los que ya se ve la problemática con el agua. No tanto de que les vayan a quitar la tierra a los campesinos, pero sí que están provocando problemas por la concesión de agua en las comunidades. El problema de la tierra está más relacionado con otro programa gubernamental que es el Procede, Programa de Certificación de Derechos Ejidales, que tiene relación con los ejidos, dotaciones de tierras que les dieron a las comunidades, algunas indígenas y otras de mestizos. Debido a los bajos precios de los cultivos indígenas la gente quiere vender la tierra para tener dinero y poder emigrar a trabajar (a los Estados Unidos, por ejemplo). Entonces por se está perdiendo la tierra de los ejidos, particularmente, porque la tierra de las comunidades no se puede vender.

—¿Qué articulación tienen estos problemas que mencionabas de la concesión de agua para las comunidades indígenas o campesinas con las organizaciones que trabajan esto a nivel urbano?

—Hay poca articulación. La problemática es común, pero hay poca articulación. En el caso del Valle de Oaxaca, vemos es que existe la necesidad de que se articule un movimiento campesino y urbano, porque la Ciudad de Oaxaca, que está —digamos— arriba de la cuenca donde están estos campesinos, les está extrayendo mucha agua. Hay algunas empresas embotelladoras de agua que están alrededor de la ciudad que están ubicadas en los lugares donde los mantos freáticos están más altos y se están construyendo unidades



habitacionales para la gente pobre, lo que está dejando sin agua a las colonias populares que se encuentran alrededor de estas unidades habitacionales. Como está en la parte más alta de la cuenca y los campesinos están en la parte baja, se van a quedar sin agua. Por eso es importante que se articulen entre los campesinos y los habitantes de las ciudades para que se puedan establecer políticas sobre el uso del agua que estén gestionadas por la gente. Porque la Comisión Nacional del Agua, las constructoras, las embotelladoras, están haciendo un uso irracional de este líquido vital.

—¿Y cual es la relación de la problemática del agua con el pago por servicios ambientales?

—En relación al agua de las zonas boscosas hay una diferencia con el Valle de Oaxaca, esa es una zona donde no llueve mucho, entonces ahorita tienen que extraer el agua del subsuelo. Pero en las zonas boscosas hay lugares en lo que lleva a haber hasta seis mil milímetros de precipitación anual, sin excepciones, pero existen esos lugares donde hay una vegetación impresionante, árboles que son endémicos de ese lugar. que son prehistóricos y que ahora se está descubriendo su existencia.

En esos lugares hay algunos programas gubernamentales de la Secretaría de Medio Ambiente, como el Prodefor, Programa para el Desarrollo Forestal, y de otros programas relacionados con el medio ambiente y con el pago de los servicios ambientales. Nosotros vemos el pago de los servicios ambientales como un problema para las comunidades porque muchas veces, junto con el ofrecimiento de pago de servicios, tienen que firmar un contrato. Al estos contratos, la comunidad prácticamente está cediendo la oportunidad de tomar las decisiones de lo que puede hacer en esas tierras, porque la contraparte del contrato es quien pone las condiciones del uso del suelo entonces. Hay una pérdida de determinación sobre el uso del suelo, una pérdida de autonomía. Junto con estos programas de pago por servicios ambientales, sobre todo servicios ambientales hídricos, también están impulsando la reforestación, pero con una sola especie. Entonces están impulsando el establecimiento de plantaciones de monocultivos, que pueden ser árboles nativos o árboles de afuera, pero son monocultivos. Además hay un componente adicional: en ocasiones están motivando a la gente a que siembre esos arboles en los terrenos donde antes sembraba maíz. Si siembra esos árboles ya no va a poder sembrar maíz y va a tener que abandonar esa tierra. Entonces vemos que los servicios ambientales funcionan como una estrategia más del capital para expulsar a la gente de las comunidades indígenas.

–Y con respecto al “tipo” de servicio ambiental, te referías a los “servicios hídricos”: ¿hay una diferenciación en el pago por esos servicios con respecto a los otros o estos contratos son generales, donde se paga por todos los servicios del bosque o de la selva?

–Lo que dicen es “vamos a pagar por todos los servicios hídricos pero esto va a ser por hectárea”, o sea, tu te comprometes a no tocar determinado número de hectáreas y yo te voy a pagar 400 pesos por hectárea al año, por ejemplo. Ese es el tipo de pago por servicio que están impulsando. Es una grosería, porque la gente puede sacar mucho más de 400 pesos por hectárea en un año de su bosque sin necesidad de hacer un mal uso de él. Están obligando a la gente a dejar su bosque.

–Y con eso dejar el lugar donde viven.

–Sí, y su cultura. La relación con el entorno va a cambiar porque no van a poder hacer uso de las plantas medicinales o de la madera.

–Ustedes también han llevado adelante un importante proceso que están llevando ustedes de descontaminación del maíz nativo –contaminado con transgénicos–, ¿qué pasó con la última cosecha?

–En la última cosecha que –es la del 2005– se hizo un muestreo en el Valle de Oaxaca, en seguimiento aun muestreo que habíamos hecho en el 2003, decidiendo ahora solamente muestrear las plantas con deformaciones morfológicas. De la totalidad de las plantas con deformaciones que se muestrearon alrededor del 10% dio positivo para la presencia de algún tipo de transgénico, lo cual es un porcentaje muy bajo. Sin embargo consideramos que este porcentaje puede ser engañoso, en primer lugar porque como son plantas contaminadas, esta contaminación se pudo producir hace cuatro, cinco o más generaciones, entonces los sistemas que fueron diseñados por las mismas empresas para detectarlos puede ser que no estén funcionando para lo que fueron diseñadas. Pensamos que la aparición de tantas deformaciones en las plantas nativas puede ser un indicador de la contaminación, pero ya no es la contaminación pura, sino que pudo tener algún cambio genético al interior de la planta. Y esto está provocando, por un lado, las malformaciones pero, por otro, que no se pueda detectar la presencia de transgénicos por los métodos que fueron arreglados para detectar transgénicos en la primera generación.

–¿Y cómo vienen llevando adelante este proceso? Están identificando las variedades con malforma-

ciones, pero ¿qué pasa con la reivindicación de la cultura indígena como mecanismo de defensa contra los transgénicos?

–Una de las cosas que hemos estado planteando con los compañeros de las comunidades con las que nos ha tocado trabajar es decir que tienen que seguir cultivando el maíz, monitoreando sus milpas, pero ahora le tienen que poner mayor cuidado a detectar la presencia de alguna malformación y que si llegan a detectar alguna malformación le tienen que quitar la espiga para que no siga expandiendo el polen. Esto no es algo nuevo. Esto se practica en algunas comunidades desde hace cientos de años.

El maíz es una planta que puede polinizar a muchas más plantas entonces no se necesita que todas las plantas tengan la espiga. Desespigar a las plantas más pequeñas, con malformaciones, o a las más débiles, puede ayudar también a que las características de las plantas vayan siendo las que la gente quiere. Es una práctica tradicional de algunas comunidades que ahorita la estamos compartiendo con otras que no la realizaban para ir mitigando el proceso que sabemos que no está en todas partes.

En algunas comunidades prácticamente ha acabado con algunos cultivos, pero en otras es muy raro que se puedan encontrar malformaciones. Así que el proceso de contaminación no es homogéneo es diferente en cada comunidad y en cada región del Estado de Oaxaca y en el país. Pero lo más importante es que la gente siga cultivando el maíz, conservando sus variedades nativas, y que las cuide de esta forma, sin necesidad de contar con apoyos gubernamentales porque generalmente cuando hay apoyos gubernamentales están orientados a otra cosa y termina en un fracaso. Aquí se trata de impulsar una alternativa que venga desde abajo, desde las comunidades.

–Para el intercambio de semillas entre las comunidades, ¿están tomando algún tipo de precaución especial? ¿Esto también se ha visto afectado por la contaminación?

–Se sigue realizando el intercambio, básicamente entre comunidades que están en un mismo ecosistema. El intercambio de semillas se realiza entre comunidades con características ecológicas similares, pero poco a poco la gente está tomando conciencia de que ya no es tan confiable hacer el intercambio de semillas, por la contaminación. Lo siguen haciendo pero ahora lo hacen con más cuidado. ●

El Banco Mundial contra la bioseguridad

Silvia Ribeiro (*)

El rol fundamental del Banco Mundial no es actuar como institución financiera, sino marcar políticas a los países, allanando el camino para que las corporaciones privadas puedan actuar posteriormente con garantías legales en las naciones.

Esto lo hacen con una mezcla de préstamos teóricamente “blandos” (con todo tipo de condiciones y que, para devolverlos, cuestan sangre a los países receptores), un porcentaje de préstamos comunes, y otro de préstamos a fondo perdido.

Estos últimos, que aparecen como donaciones, son en realidad los más caros, porque son los que preparan el terreno para el avance de las trasnacionales en áreas donde de otra forma no hubieran podido entrar o les hubiera resultado mucho más costoso en reputación y dinero. Un ejemplo típico de esta última forma de actuación lo constituyen los proyectos financiados a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés). Este es administrado por el Banco, junto a los programas de medio ambiente y desarrollo de Naciones Unidas (PNUMA y PNUD).

Dentro de la línea de Biodiversidad del GEF se encuentran por ejemplo, el Corredor Biológico Mesoamericano y otros ejemplos de legitimación del uso industrial de la biodiversidad, la justificación de la biopiratería y el desplazamiento a nombre de “conservación” de campesinos e indígenas de sus territorios ancestrales, así como la alienación de los sistemas de manejo forestal comunitario introduciéndolos al “mercado de servicios ambientales”. En este contexto, no podía faltar la promoción y justificación de los transgénicos, operada a través de los mal llamados proyectos de bioseguridad.

El GEF ya ha cosechado un aluvión de críticas en este tema en los últimos años, con los proyectos PNUMA-GEF sobre bioseguridad, que han sido fuertemente criticados por organizaciones de la sociedad civil en prácticamente todos los países donde han operado en América Latina, África y Asia. El denominador común ha sido que estos proyectos, bajo la cobertura de



proyectos de capacitación y diálogo “multisectorial”, en realidad, sentaron las bases para normativas de bioseguridad que favorecen los intereses globales de las pocas empresas trasnacionales de transgénicos.

En una nueva hazaña del GEF están considerando ahora la aprobación de dos proyectos multimillonarios en África y América Latina, cuyos objetivos principales son legitimar la introducción de cultivos transgénicos en sus centros de origen y/o de cultivos de particular importancia para las economías campesinas de países megadiversos.

(*) Investigadora del Grupo ETC



En el caso de América Latina, se trata de “capacitar” a los gobiernos de México, Brasil, Perú, Colombia y Costa Rica para manejar por un lado la contaminación transgénica resultante de la introducción de maíz, papa, yuca, arroz y algodón genéticamente modificados y por otro, manejar la opinión pública crítica de los transgénicos, a través de análisis costo-beneficio y de estandarizar lo que llaman bases científicas “adecuadas” de manejo de la contaminación. En ninguna parte del proyecto consideran que la mejor bioseguridad para prevenir la contaminación es no permitir los cultivos transgénicos, tal como millones de campesinos, indígenas, ambientalistas, consumidores y científicos responsables reclaman en esos países. Por el contrario, el supuesto básico es que los transgénicos ya están o inevitablemente serán introducidos. Con el brutal agravante que en este caso estamos hablando de que cuatro de los cultivos mencionados tienen centro de origen en los países involucrados, donde han sido producto del trabajo campesino de adaptación durante miles de años. El arroz, aunque originario de Asia, también ha sido adaptado por los campesinos de la región, para quienes, junto a los otros cultivos en cuestión, constituyen la base de sus economías, culturas y formas de vida.

El proyecto sería coordinado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (uno de los 18 centros internacionales públicos del sistema CGIAR que según su misión debería dedicarse a apoyar la agricultura campesina en lugar de sabotearla), con instituciones gubernamentales, universidades e institutos privados de

los países. Entre los asesores figuran instituciones de cobertura de las empresas transnacionales, principales beneficiarios reales del proyecto.

En el caso de México, las contrapartes son la Comisión Nacional para la Biodiversidad, Sagarpa y Cibio-gem. María Francisca Acevedo y Amanda Gálvez son sus contactos. El proyecto fue enviado para la revisión de “expertos” a Ariel Alvarez Morales, del Cinvestav. En los comentarios que éste dirige al GEF, dice por ejemplo: “No coincido con que los cultivos modificados por la biotecnología moderna son lo más importante en el mediano plazo. ¡Lo son en el presente! Los desafíos a corto y mediano plazos son las plantas transgénicas para producir fármacos, los peces y artrópodos transgénicos. Por eso veo la necesidad de incluir estas áreas en el programa propuesto...”

O sea, no le alcanza que México ya sea el experimento de las transnacionales con la contaminación del maíz nativo, sino que debería también ser pionero en otras formas devastadoras de contaminación.

El proyecto presentado al GEF no incluye, hasta ahora, las sugerencias de Alvarez. Pero sin duda, pone de manifiesto las intenciones reales de éste: ahorrarle tiempo a las empresas para que el discurso esté preparado para justificar las nuevas generaciones de transgénicos.

La sociedad civil está alerta y ya comenzó una amplia campaña en ambos continentes para detener estos proyectos, con un primer informe de denuncia elaborado por el Centro Africano para la Bioseguridad, Grain, Grupo ETC y la Red por una América Libre de Transgénicos. A través de éstos se puede conseguir más información. ●

Fuente: La Jornada



¿Monocultivos sustentables? No gracias

Desenmascarando las estrategias de maquillaje del agronegocio

El término “desarrollo sustentable” siempre ha sido un concepto camaleónico, fácilmente utilizado para confundir la destrucción ambiental. El agronegocio posee un particular talento para tal lavado de cara. Su último truco consiste en presentar a la industria de monocultivos como sustentable. Hoy en día, estos proyectos corporativos están surgiendo en todas partes del mundo, abarcando desde “plantaciones de palma aceitera sustentables” hasta “granjas salmoneras sustentables”. Esto, de todas maneras, es lo que cabría esperar del agronegocio. Sin embargo, lo que resulta aún más preocupante es el hecho de que ONGs y grupos de agricultores estén también participando en estos proyectos corporativos.

Este “A Contrapelo” hecha una mirada crítica sobre algunos de estos proyectos y las nuevas máscaras, nuevos actores y nuevo lenguaje que utilizan para lograr el objetivo histórico inalterado de convertir nuestra alimentación y biodiversidad en commodities globales.

¿Palma aceitera sustentable?

La palma aceitera es el más productivo y versátil de todos los cultivos aceiteros. Una hectárea del cultivo puede producir cinco toneladas de aceite de palma crudo (APC), aceite que en su mayoría se utiliza en manufactura de alimentos y en la industria farmacéutica, la química y la cosmética. Al precio de USD 43 por barril, es el aceite vegetal más barato en el mercado internacional.

Con el crecimiento de la demanda de aceite de palma, el área de tierra dedicada a las plantaciones de palma aceitera aumentó dramáticamente en los últimos años. En Malasia e Indonesia, los mayores productores mundiales de aceite de palma, el área cultivada con plantaciones de palma aceitera aumentó cerca de un 40% desde principios de la década del 90¹. Indonesia planea crear la plantación de palma aceitera más grande del mundo, con un área aproximada de tres millones de



hectáreas, en Borneo. Y ha firmado recientemente un acuerdo de financiación por un monto de \$8 mil millones con el *China Development Bank* para desarrollar otra plantación de palma aceitera, con una superficie igual a la mitad del territorio de los Países Bajos.

Este aceite barato conlleva costos que están ocultos. En su mayor parte, el aceite de palma proviene de plantaciones de monocultivos industriales de palma aceitera que son célebres por el uso de pesticidas y por las condiciones de trabajo precarias. Adicionalmente, las nuevas plantaciones de palma aceitera son desarrolladas por lo general en bosques tropicales. Solamente en Malasia, las plantaciones de esta palma fueron responsables del 87 por ciento de la deforestación entre 1985–2000².

La conversión de bosques en plantaciones de monocultivos conduce a una pérdida irremplazable de biodiversidad y, en Malasia, diversas especies de mamíferos, reptiles y pájaros se han perdido por completo a causa del crecimiento de la palma aceitera. Pero el desmonte de los bosques no ha interferido solamente en el hábitat del reino animal. En tanto la expansión de las plantaciones de palma aceitera invade tierras de uso nativo, las comunidades indígenas son regularmente desplazadas y despojadas de su sustento, cuya base es el bosque, poniendo en peligro su identidad y su supervivencia misma como pueblos.

Ante la creciente crítica internacional, la *Mesa Redonda sobre Palma Aceitera Sustentable* (RSPO, por su

El concepto de “sustentabilidad”

La sustentabilidad como concepto surge a partir del Informe Brundtland de 1987 de la mano del “desarrollo sustentable” y la propuesta de continuar manteniendo este modelo de crecimiento económico “ajustando” los parámetros para permitir su continuidad en el tiempo. Por cierto no fue un buen comienzo. La propuesta dejaba intacta y fuera de debate las principales bases del modelo de producción depredador que, reconocía, estaba llevando al planeta a la debacle. Al mismo tiempo esquivaba el debate sobre los aspectos socioeconómicos y las consecuencias a ese nivel de ese modelo económico, como la generación creciente de pobreza a escala global y el enorme agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres.

Ya en la Cumbre de la Tierra el teólogo Leonardo Boff planteaba que lo que necesitábamos no era un desarrollo sustentable sino sociedades sustentables. A partir de allí, distintos sectores de la sociedad fueron apropiándose del término “sustentabilidad”. Uno de los intentos más destacables del movimiento ambientalista por definir el término surgió del proceso “Cono Sur Sustentable”, en América del Sur¹. Propone cuatro dimensiones necesarias para la sustentabilidad:

– La dimensión ecológica implica preservar y potenciar la diversidad y complejidad de los ecosistemas, su productividad, los ciclos naturales y la biodiversidad. La crisis ecológica no es un problema abstracto que interesa sólo a las clases medias de los países del Norte, que tienen satisfechas sus necesidades básicas y pueden preocuparse por el entorno natural. La crisis ecológica está directamente ligada a la sobrevivencia física y cultural de las comunidades y de los sectores excluidos del planeta.

1 Argentina Sustentable, http://www.pas.org.ar/que_es_AS.htm

– La dimensión social refiere a un acceso equitativo a los bienes ambientales, tanto en términos intra-generacionales como inter-generacionales, tanto entre géneros, como entre culturas. La dimensión social de la sustentabilidad permite apreciar la relevancia que adquiere la justa distribución de los bienes ambientales en un mundo donde la inequidad aumenta día a día.

– La dimensión económica exige redefinir la actividad económica de acuerdo con las necesidades materiales e inmateriales, entendidas no sólo como carencias sino como potencialidades. Las nuevas actividades económicas deben basarse en unidades de producción locales y diversificadas, adaptadas a las características de los ecosistemas para usarlos de manera sustentable.

– La dimensión política refiere a la participación directa de las personas en la toma de decisiones, en la definición de su futuro colectivo y en la gestión de los bienes ambientales a través de estructuras de gobierno descentralizadas y democráticas. Plantea la necesidad de resignificar la política y generar nuevas prácticas basadas en la participación directa y el protagonismo de las personas en la búsqueda de alternativas, que necesariamente deben surgir de relaciones horizontales, ajenas a esquemas centralizados y verticalistas que concentran el poder. La sustentabilidad sólo será posible si se devuelve el poder de decisión al pueblo.

Sin embargo, muy lejos de estas búsquedas, y en clara oposición al movimiento ambientalista, las grandes corporaciones comenzaron también a reclamar el derecho a contar con sus propios argumentos en torno a la “sustentabilidad”, a través de iniciativas como el “Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable”. Hoy en día, los proyectos de monocultivos sustentables son sus descendientes directos.

sigla en inglés) fue fundada, supuestamente, para fijar un nuevo curso para la industria: el “sustentable”³. Su objetivo es definir una serie de principios y criterios que atiendan las cuestiones sociales y ambientales ligadas al aceite de palma. Pero los grupos y las coaliciones locales desconfían, especialmente con la participación de ONGs que, ellos creen, son simples maquillajes de las industrias extranjeras.

¿Tornando verde a la industria o industrializando “lo verde”?

La historia de la Mesa Redonda se remonta al año 2001, cuando la WWF (World Wide Fund for Nature)

designó a un consultor holandés para evaluar las posibilidades de cooperación informal entre los actores de la industria del aceite de palma para responder a las preocupaciones de la sociedad civil acerca de las plantaciones de palma aceitera. La primera reunión contó con la presencia de *Aarhus United UK Ltd*, *Golden Hope Plantations Berhad*, *Migros*, *Malaysian Palm Oil Association*, *Sainsbury's*, *Unilever* y *WWF*, en el año 2002⁴.

Desde entonces, nuevas organizaciones se han unido a la Mesa y, en noviembre de 2005, compuesta ahora por aproximadamente un centenar de miembros, llevó a cabo su tercera reunión, en donde presentó los *Principios y Criterios para la Producción Sustentable de Palma Aceitera* de la RSPO. Algunos elementos de los Principios y Criterios incluyen:

I– certificación: que la cadena de suministros utilice solamente aceite de palma proveniente de fuentes sustentables / responsables

II– consentimiento previo informado: que las comunidades locales sean consultadas acerca del proyecto y que el consentimiento otorgado por ellas no sea pagado

III– cuidado por el ambiente: que no se realicen quemas en las zonas que se desmontan en función de las plantaciones

La intención de esta Mesa es atraer partes interesadas – agricultores, molineros, manufactureros, financieros, y representantes de ONGs sociales y ambientales – para generar una demanda de “palma aceitera sustentable”. Los promotores afirman que, reorientando la demanda, se logrará mejorar el suministro.

Pero en el marco del debate sobre sustentabilidad, no existe manera de que la RSPO evada su contradicción inherente. El problema de la producción industrial de aceite de palma es que depende de plantaciones a gran escala de palma aceitera que difícilmente puedan ser consideradas sustentables. Una plantación de palma aceitera es un monocultivo intensivo que se basa en gran medida en insumos tales como fertilizantes y pesticidas. Requiere de vastas franjas de tierra, las cuales tiende a tomar de bosques naturales y nativos. Y, en tanto agota rápidamente la fertilidad del suelo, debe expandirse constantemente o trasladarse a otras áreas. Las plantaciones de palma aceitera son tan dañinas que suelen ser abandonadas luego de 25 años.

Esta constante expansión de plantaciones de palma aceitera es la base de los conflictos entre la industria y las comunidades locales. En el Estado malayo de Sarawak, por ejemplo, la mayoría de los 130 casos de disputa por la tierra en curso se relacionan con la conversión de tierras de uso nativo por compañías malayas de aceite de palma⁵. Pero el punto principal para las compañías miembro de la RSPO es que no aprobarán ninguna medida que ponga en peligro sus fuentes de aceite de palma. No sorprende entonces que los Principios y Criterios de la RSPO no mencionen la posibilidad de detener la expansión de las plantaciones de palma aceitera o la reducción mundial de consumo de aceite de palma. La RSPO sencillamente no obstaculizará la expansión continua de plantaciones de palma aceitera sobre bosques biodiversos y tierras de pueblos indígenas, aún si esto deja en el ridículo sus intenciones de promover aceite de palma “sustentable”.

La actual prioridad de la RSPO es que la sustentabilidad del aceite de palma sostenga la producción de palma aceitera no sustentable. Se sienta alegremente de brazos cruzados a proclamar Principios y Criterios o a abogar por “mejores prácticas de gestión”, pero cuando



de desarrollar cultivos de palma aceitera sustentable se trata, la RSPO deja a los productores la milagrosa tarea de descifrar cómo convertir el agua en vino.

Relaciones peligrosas

¿Por qué están entonces algunas ONGs procurando ser miembros de la RSPO? Algunas ONGs de Indonesia ven esa relación como una estrategia para influenciar a los sectores gubernamentales indonesios posicionados en pro de la inversión. Hay también quienes creen que las ONGs pueden erigirse en las voces de la comunidad y ser el puente hacia la industria de palma aceitera. Una ONG afirma que algunas comunidades locales están ahora mejor posicionadas para ser escuchadas por la industria de palma aceitera debido, justamente, a la participación de ONGs en la RSPO. Algunas ONGs esperan obtener beneficios en cuestiones específicas, como por ejemplo la mejora de las condiciones para los trabajadores en las plantaciones.

Pero hay quienes consideran que este es un vínculo peligroso; las comunidades indígenas en particular. Afirman que existen muy pocos grupos en representación de los intereses de mucha gente afectada. Mientras cada miembro tiene derecho a un voto –siempre y cuando pague la tasa anual de membresía equivalente a USD 2.600– del total de 103 miembros de la RSPO, ni uno sólo de ellos es representante de comunidades locales o pueblos indígenas. Hay 11 ONGs formando parte de la Mesa, pero la gran mayoría de los 92 miembros restantes representan a sectores varios de la industria.

Existe, adicionalmente, una preocupación aún más importante en torno a la RSPO. Algunos sectores la ven como una estrategia de la industria para debilitar la oposición a la expansión de la producción de palma aceitera. En Papúa Nueva Guinea, en donde un tratado preferencial de comercio con la Unión Europea atrae los intereses de desarrollo de palma aceitera de inversores extranjeros, una coalición de grupos y comunidades locales han exigido a la RSPO retirarse del país. La coali-

ción emitió una declaración cuando representantes de la RSPO visitaron el país en 2005⁶. La declaración criticaba a la RSPO por desviar la atención pública de los daños sociales y ambientales causados por la palma aceitera y por debilitar a los integrantes de las comunidades y las organizaciones locales. De acuerdo a la experiencia de la coalición, y a la de otros grupos de las vecinas Malasia e Indonesia, la palma aceitera “causa inevitablemente conflicto social y contaminación ambiental, y priva a las comunidades locales del derecho a hacer uso de sus tierras para su propio desarrollo económico y social”.

Sojas sustentables, sojas responsables – Más soja

“La expansión de la soja en América Latina representa una reciente y poderosa amenaza sobre la biodiversidad del Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. La soja transgénica es ambientalmente mucho más perjudicial que otros cultivos porque además de los efectos directos derivados de los métodos de producción, principalmente del copioso uso de herbicidas y la contaminación genética, requiere proyectos de infraestructura y transporte masivo (hidrovías, autopistas, ferrovías y puertos) que impactan sobre los ecosistemas y facilitan la apertura de enormes extensiones de territorios a prácticas económicas degradantes y actividades extractivistas. La producción de sojas resistentes a los herbicidas conlleva también a problemas ambientales como la deforestación, la degradación de suelos, polución con severa concentración de tierras e ingresos, expulsión de la población rural a la frontera amazónica o áreas urbanas, fomentando la concentración de los pobres en las ciudades. La expansión sojera distrae también fondos públicos que podrían haber sido destinados a la educación, la salud o la investigación de métodos agroecológicos alternativos de producción.”⁷

La Mesa redonda de Soja Sustentable desarrolló su primera reunión en Foz do Iguazú, Brasil, los días 17 y 18 de marzo de 2005, reuniendo a una serie de ONGs y corporaciones. Al igual que en la RSPO, a cuyo modelo respondía, los principales actores fueron la WWF y empresas como Unilever. También estuvieron presentes en el comité organizador el Grupo André Maggi de Brasil, la cadena suiza de supermercados COOP, la agencia alemana para el desarrollo Cordaid y la Federación de Asociaciones de Pequeños Agricultores del sur de Brasil (Fetraf-Sul/CUT).

La iniciativa inmediatamente tropezó con la crítica generalizada de la sociedad civil y las organizaciones campesinas, quienes organizaron un contra-encuentro paralelo, en el que se cuestionaron los fundamentos de la propuesta y donde se denunció el “gatopardismo



empresario” bajo la consigna “No a la Soja Sustentable”. En este Contraencuentro las organizaciones participantes manifestaron en el documento final que “le decimos NO a la mentira de la sustentabilidad de la soja, afirmada oficialmente en la mesa redonda de soja sustentable en Foz de Iguazú, a partir de los intereses de los países del Norte y de los empresarios de los agronegocios, con el apoyo escandaloso de grandes ONGs, que se dicen ambientalistas, nacionales e internacionales. Donde hay monocultivos no puede existir sustentabilidad, donde hay agronegocios no pueden existir campesinos”. En el documento los campesinos establecen también la denuncia de “los agronegocios como responsables por la mercantilización de la vida y de la tierra. Denunciamos a los gobiernos de América Latina por la exclusión de la reforma agraria de las políticas de Estado. Resistimos como pueblos indígenas y campesinos en la defensa de las culturas, de los territorios y de las economías tradicionales. Construimos una indispensable unidad en las luchas con los movimientos sociales urbanos”.

Esta resistencia popular obligó a la industria a dejar de trabajar en el proyecto de “Soja Sustentable” por unos meses e incluso a bloquear temporalmente la página Web del proyecto. Sin embargo, poco tiempo después, el proyecto resucitó con un nuevo nombre, “Soja Responsable”, y ya está fijada una segunda reunión para agosto de 2006, en Asunción, Paraguay.⁸

Mientras tanto, otras iniciativas de ONGs-corporaciones están aún activas. La “Articulación Soja”, en el centro de Brasil, promueve la “producción de soja de bajo impacto social y ambiental”, y propone una serie de “criterios para la responsabilidad social de las compañías que compran soja”. Cargill y *The Nature Conservancy*, una ONG con base en Estados Unidos, cuentan asimismo con su propio “proyecto demostrativo de ‘servicio de proveedores externos responsables’ para soja que pretende ser un estímulo para la protección de valiosos recursos ambientales en los alrededores de la región de Santarém”. El objetivo último de este proyecto es “definir y desarrollar estrategias aceptables en la tarea de asistir a todos los agricultores de la región para que den cumplimiento absoluto a la legislación ambiental de Brasil”. La iniciativa de Cargill fue ampliamente rechazada por el FBOMS (*Foro Brasileiro de ONGs y*

Movimientos Sociales), que se reunió durante la edición de la COP8 del Convenio sobre Diversidad Biológica en Curitiba, Brasil, durante marzo de 2006.

Los monocultivos industriales no son sustentables

La *sustentabilidad* es un sin sentido si no surge del respeto básico por las vidas de las comunidades y sus medios. La producción mercantil de monocultivos industriales carece por completo de tal respeto. Vemos en consecuencia que los proyectos de monocultivos sustentables siempre son concebidos y definidos por aquellos que detentan el poder económico. Por lo tanto, están siempre adaptados a la producción agroindustrial de commodities para la exportación, lo cual inevitablemente reemplaza la producción local de alimentos por la industrial o la de piensos, que poco tienen que ver con las necesidades de la comunidad. De esta manera, los proyectos contribuyen a romper la solidaridad, el intercambio y el control autónomo propios del tejido social, ejes fundamentales de los sistemas locales de producción alimentaria, obligando a las comunidades a depender del “mercado” para abastecerse de alimento. Dentro de estos proyectos de agricultura industrial, no hay lugar para los campesinos y sus sistemas agrícolas. Los monocultivos, además, atentan por definición contra la diversidad –otro elemento crítico de la sustentabilidad. No importa cuánto traten de autoregularse o “mejorarse”, siempre generarán impactos irreparables sobre las comunidades, los ecosistemas y el suelo. A escala global, esta reducción del suministro mundial de alimentos a unos pocos monocultivos –suministro que descansa sobre una plataforma genética sumamente estrecha de semillas genéticamente modificadas y patentadas– plantea enormes e impredecibles riesgos para el sistema alimentario mundial, y para los pobres del mundo en particular.

Por supuesto, tales cuestiones fundamentales no están planteadas en las “alianzas” existentes entre corporaciones, ONGs y agricultores para fomentar los proyectos de monocultivos sustentables. No existen visiones ecosistémicas, sólo puntos de vista fragmentados. Tampoco existe interés genuino alguno en ir más allá. Las comunidades afectadas que podrían atestiguar sobre sus problemas fundamentales, por lo general no son informadas, asesoradas e incluidas acerca de y en estos proyectos de manera adecuada. Más bien, los proyectos generalmente intentan persuadir a las organizaciones locales a través de prebendas. Cuando el dinero entra en escena, ciertamente, el “consenso” acordado sólo beneficia a unos pocos. El objetivo de la sustentabilidad se convierte, de este modo, en poco

más que un ejercicio de mejoramiento de la imagen social de la industria.

Las organizaciones locales se están manifestando contra el intento de utilización que los agronegocios hacen de la “sustentabilidad” como una cortina de humo para la continua explotación, saqueo y destrucción de sus tierras. Han dejado en claro que, a menos que el punto de partida de cualquier proyecto sea la plena y activa participación de las comunidades locales, de modo que exista respeto por sus propias formas de organización, es completamente absurdo imaginar un resultado “sustentable”.

En estos tiempos de luchas globales no debemos olvidar que es en cada comunidad y en cada espacio local en donde se gestó la agricultura. Y será allí, con sus propias particularidades, desde la tierra y desde el alma de las campesinas y los campesinos que aún siguen dialogando con ella, donde se gestarán las respuestas que estamos buscando. ●

Páginas Web sobre monocultivos “sustentables”

Our solutions: Forest Conversion Initiative
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/our_solutions/responsible_forestry/conversion/roundtables/index.cfm

Sustainable Palm Oil
<http://www.sustainable-palmoil.org/>

Round Table on Responsible Soy
<http://www.responsiblesoy.org/esp/index.htm>

Articulação Soja
<http://www.cebrac.org.br/forumnovo/>

Responsible Sourcing in the Amazon:
A partnership between Cargill and The Nature Conservancy
http://www.cargill.com/news/issues/issues_tncfactsheet.pdf

Notas

- ¹ *La industria de palma aceitera*, página Web de la RSPO, <http://www.sustainable-palmoil.org/background.htm>
- ² *Palm Oil, the survival of the orang-utan and UK company law reform*, Friends of the Earth, May 2006, www.foe.co.uk/resource/briefings/palm_oil_company_law.pdf
- ³ Ver “Energy and Oil Palm”, The Ram’s Horn #235, Febrero 2006: <http://www.ramshorn.ca/archive2006/235.html#meltdown>
- ⁴ RSPO, “History of RSPO”: <http://www.sustainable-palmoil.org/background.htm>
- ⁵ Hillary Chiew, “Disappearing haven”, Malaysian Star, 27 de diciembre 2005. <http://thestar.com.my/lifestyle/story.asp?file=/2005/12/27/lifefocus/12849696&sec=lifefocus>
- ⁶ “Palm Oil Not welcome in PNG”, comunicado de prensa conjunto, 18 de abril 2005, <http://www.ecoforestry.org.pg/pressreleases/Palm%20oil%20roundtable%20not%20welcome,18%20April%202005.pdf>
- ⁷ M. Altieri y W. Pengue, “La soja transgénica en América Latina: una maquinaria de hambre, deforestación y devastación socioecológica”, *Revista Biodiversidad, sustento y culturas* N° 47, enero 2006, <http://www.grain.org/biodiversidad/?id=307>
- ⁸ <http://www.responsiblesoy.org/esp/index.htm>

Resistiendo los Agronegocios

Los días 23, 24 y 25 de junio de 2006 se realizó en Buenos Aires, Argentina, un “Foro de Resistencia a los Agronegocios”, con la participación de movimientos campesinos, pueblos originarios, grupos ecologistas, intelectuales y organizaciones urbanas provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y Ecuador. A continuación reproducimos un resumen de la síntesis política de este foro.

Propósito

La violencia del modelo de los Agronegocios se manifiesta a diario: en la expulsión de los campesinos, la militarización del campo, la extranjerización de territorios, la apropiación de los recursos naturales, las inversiones del Estado al servicio de las corporaciones con crecimiento de las deudas externas (en puertos, hidrovías, rutas, vías de telecomunicación), la concentración de tierras, la desertificación, la contaminación por agrotóxicos y por transgénicos, la destrucción de la biodiversidad, el éxodo rural y el crecimiento de los cinturones de miseria en torno a los centros urbanos, la desocupación generalizada y precarización del trabajo, el hambre y la desnutrición, las enfermedades y muertes por causas evitables, la colonización de nuestras culturas y la pérdida de los patrimonios alimentarios, el dominio del supermercadismo en los mercados locales y el control los precios de los alimentos y los contenidos de la canasta básica de las transnacionales.

Todas estas consecuencias devienen de un proceso que nace en los modelos rurales y que se proyecta y domina la sociedad urbana. Este modelo de los agronegocios, bajo los criterios de la inserción al mercado global, se nos impone como la única vía del desarrollo y del progreso de nuestros países conllevando trastornos humanitarios y ecológicos de dimensiones catastróficas.

La intención del Foro de Resistencia a los Agronegocios fue sumar fuerzas y denunciar el proyecto político de los agronegocios, como así mismo dar un primer paso al promover los diálogos iniciales para la organización en nuestra región de un frente común de oposición a su modelo político y económico. El Foro buscó contrarrestar la realización de dos grandes “eventos de los agronegocios”: la Conferencia Mundial de la IAMA (Asociación Internacional de Management de Agronegocios) realizada en Buenos Aires entre el

10 y 13 de junio con el lema de “Agronegocios, Alimentos, Salud y Nutrición” y el encuentro MERCOSUR realizado del 27 al 30 de junio en Rosario, provincia de Santa Fe, con el auspicio de corporaciones tales como Bunge, Cargill, Basf, Banco Galicia, YPF, Bayer y que reunió a unos quinientos empresarios del Cono Sur de la América Latina.

Enfoque

Existen resistencias que operan en diversos niveles de lucha, de conciencia y de organización. Sin embargo, la actual separación entre la acción local de los movimientos sociales y la acción de los grupos activistas y de investigación nos debilita frente a este modelo devastador que afecta a todos. Es necesario por ello generar sinergia y dar un paso más allá del diagnóstico y las denuncias para converger en estrategias efectivas.

Nuestra tarea es comprender la dimensión que tienen los agronegocios como proyecto político que afecta al conjunto de la sociedad. Abordamos la complejidad del marco de los agronegocios, presentando una serie de bloques temáticos para lograr una dimensión estructural, como formas más operativas de trabajo. Estos siguieron las líneas, ideas y conceptos extraídos de las conferencias y discusiones que se desarrollaron en el Foro.

- 1. El poder: los agronegocios son un proyecto político y territorial Las actividades de los “agronegocios” y las industrias extractivas constituyen el eje estructural y el origen de los principales conflictos sociales y ambientales en la región sudamericana.**

Desde el agro se está desarrollando una estrategia regional y un proyecto de integración corporativa. La

dominación territorial se expresa a través de la expansión de los monocultivos y la culminación de las vías logísticas de escurrimiento hacia los puertos al exterior. Nos referimos específicamente al proyecto Hidrovía – IIRSA (Integración de Infraestructura Regional Sudamericana). El poder ejercido por los agronegocios en el marco del capitalismo global produce una dinámica que se expresa en la ocupación de los Estados nacionales, donde sus agentes disfrazan las políticas corporativas en políticas públicas. Las influencias de las organizaciones multilaterales (Banco Mundial, BID, FMI, OMC, ONU) coordinan la ingeniería de este nuevo orden globalizador. Las transnacionales de la cadena agroalimentaria (Monsanto, BUNGE, Cargill, ADM, Basf, Bayer, Syngenta, Unilever, Nestlé, etc) han barrido con las economías y los mercados locales. Esta dinámica se justifica en la lógica económica condicionada al pago de la deuda externa mientras las elites políticas locales bajo pensamientos “progresistas” alientan planes asistenciales masivos como respaldo a los nuevos modelos neocoloniales de la dependencia. En este contexto común a todos nuestros países los agronegocios configuran un proyecto político hegemónico, el que establece los modos de la sumisión colonial contemporánea. Las devastadoras consecuencias sociales y ambientales nos permiten concluir que no hay coexistencia posible de ese proyecto político con el desarrollo y la soberanía de nuestros pueblos.

2. La colonización del poder en la América Latina del siglo XXI – el neocolonialismo de los agronegocios versus la Soberanía Alimentaria.

En el siglo XXI los agronegocios representan la perpetuación del proyecto colonial que hace 500 años viene naturalizando el desgarramiento de las venas de América Latina que tan bien ejemplificara Eduardo Galeano. El modelo de monocultivos instalado desde la conquista ha adaptado nuestra producción agrícola a las necesidades del desarrollo capitalista, y adquiere en esta etapa del capitalismo global un nuevo carácter de dependencia con la introducción de tecnologías agrícolas y sistemas de transformación y distribución de alimentos controlados por grandes corporaciones transnacionales. En el marco de la protección de la propiedad intelectual (TRIPS – OMC), las cadenas de producción agroindustrial alientan la dependencia a paquetes tecnológicos. Nuestras economías nacionales se condicionan desde las semillas transgénicas a las góndolas de los supermercados y nuestros patrones alimentarios son sometidos a una cultura cada vez más homogénea y globalizada. La expansión de la agricultura industrial para la producción de commodities genera la contaminación química del agua, del aire y de los



demás recursos naturales y pérdida de biodiversidad. Estos efectos del modelo de producción y consumo son la causa del cambio climático, del calentamiento global, y la erosión y desertificación de los suelos que amenazan la continuidad de la vida en el planeta. La crisis del cambio climático generado por las industrias del norte, nos enfrenta a la amenaza de los biocombustibles y a toda la extensión adicional de territorios en monocultivos que eso representa. La particularidad de esta etapa es que el propio sistema capitalista reconoce la lógica destructiva intrínseca a su funcionamiento, manteniendo las dinámicas de mercado a través de estrategias de “sostenibilidad” y “conservación”. Las ciudades, cada vez más superpobladas y violentas, sufren las consecuencias del desarraigo y la pérdida de cultura, imponiéndose una dinámica de consumismo conveniente a los residuos de la globalización. Las agriculturas campesinas y familiares, las áreas de reserva natural y los territorios de pueblos originarios constituyen las zonas principales de resistencia al avance de los agronegocios. En la última década la organización y resistencia campesina ha generado un movimiento internacional de articulación y de representación de las voces y demandas del campo: la “Vía Campesina”. La principal fuerza y arma de lucha de la Vía Campesina es la formulación del concepto de Soberanía Alimentaria, paradigma de lucha por una reforma agraria integral. Esta propuesta reivindica el derecho de cada pueblo a la libertad para decidir sobre la comercialización de excedentes, sólo después de haber garantizado la propia alimentación de su población con los recursos propios de su territorio y en un patrón cultural, ambientalmente adecuado y saludable. Contra la dieta colonizada que nos proponen los agronegocios, también pretende que se respeten las prácticas y el conocimiento campesino y se preserve la diversidad cultural y alimentaria. La soberanía alimentaria constituye el programa principal de lucha contra los agronegocios.

3. Unir las fuerzas: Biodiversidad y Reforma Agraria.

Desde cada una de sus perspectivas los movimientos ecologistas y los movimientos campesinos y pueblos originarios en América Latina vienen profundizando la denuncia del modelo de producción y consumo capitalista y sus efectos sobre las condiciones de vida de nuestros pueblos. El reconocimiento de la existen-

cia de estos dos campos de lucha, tanto en la crítica y como en la capacidad de resistencia, nos lleva a la convicción que es preciso impulsar amplios procesos de convergencia. Es urgente generar nuevos paradigmas de pensamiento y acción política. El Foro estableció un espacio donde confluyeron movimientos ecologistas, organizaciones sociales, investigadores, pueblos originarios y movimientos campesinos de la región sudamericana. Con sus distintas perspectivas trató de abarcar la magnitud y el significado de los agronegocios para entender la cadena de la degradación, violencia y crisis constantes que sufrimos. Hoy la conciencia de nuestra responsabilidad planetaria no admite el apego a viejos equipos conceptuales y nos obliga a replantear las herencias ideológicas que impiden proponer alternativas al proyecto científico tecnológico. Una visión atada a la idea del progreso indefinido que se ha impuesto como única verdad del desarrollo de la humanidad. Incluso los discursos progresistas construyen sus propuestas bajo la ideología de la ciencia, del desarrollo tecnológico, de la modernidad y del progreso. Por ello debemos atrevernos a cambiar la mirada.

4. Agricultura y Capitalismo – Ecología y Política

La introducción de nuevos mecanismos de apropiación, de mercantilización y explotación de la agrobiodiversidad (como por ejemplo la propiedad intelectual y las cadenas integradas de producción) profundizan la acumulación capitalista a niveles hasta ahora impensables. El elemento más emblemático de este proyecto es la agricultura de transgénicos – donde el control y la dominación pasan a ser estructurales. Las semillas son el recurso productivo fundamental y originario de la vida y la agricultura, y por ello mismo son ellas la base de la reproducción de todo el sistema biotecnológico del Capitalismo Global. Los cambios en la agricultura, la explotación y separación de los hombres y mujeres de la tierra – y la transformación de esta en propiedad privada y mercancía – están en el origen histórico del surgimiento del capitalismo y de las sociedades industriales y urbanas. En esta etapa histórica, la globalización está realizando una transformación aún más radical y fundamental para el mantenimiento del sistema. Identificar la forma en que se opera la conversión de la agricultura en una actividad industrial, sus impactos sobre las personas y el medio ambiente, sobre nuestras culturas y biodiversidad, es un reto central para comprender el sistema y poder llegar a transformarlo. Nuestro principal desafío es situar lo rural, las poblaciones campesinas y el arraigo a la tierra y a nuestra diversidad cultural en el centro de la acción política. La resistencia campesina e

indígena y los nuevos pensamientos que derivan de la Ecología, cuestionan una civilización urbano industrial tecnologizada y no sólo el sistema capitalista. Nos proponen la refundación y la reconciliación de nuestra relación con el planeta que es nuestro hogar y con la naturaleza de la cual formamos parte.

5. Propuestas: la resistencia a los agronegocios, un primer paso hacia la articulación.

Los acuerdos a que arribaron los participantes del Foro, giraron en torno a la necesidad de visualizar el significado de este avance de los agronegocios e instalar este debate en el centro de las discusiones políticas en nuestra región por encima de visiones y abordajes sectoriales. También se acordó que solo una férrea alianza de los sectores más combativos de la ciudad y del campo puede poner freno a estas políticas y abrir para la región nuevos horizontes. Para esa gran tarea que tenemos por delante no sólo es necesario asumir pensamientos más abarcativos sino también resolver las nuevas articulaciones sociales que logren sumar con generosidad a una lucha común los nuevos protagonismos urbanos y rurales. Por último, entendemos que un proyecto de autonomía y emancipación para conquistar nuestra soberanía política pasa hoy imprescindiblemente, por la conquista de nuestra Soberanía Alimentaria.

Siguientes pasos:

1–Se planteó el seguimiento de esta iniciativa ampliando la plataforma de organizaciones promotoras, incorporando mayor diversidad de organizaciones a nivel regional, para una agenda de trabajo de seguimiento a esta iniciativa. Así mismo se plantea la prioridad de reforzar esta iniciativa a través del desarrollo de talleres a nivel nacional.

2–El grupo organizador del Foro se comprometió a mantener la página web de www.resistalosagronegocios.info como el instrumento donde subir documentos e información relevante. También asumió la tarea de transcribir el contenido de los paneles desarrollados durante las dos jornadas del foro y desarrollar herramientas, tales como manuales y diapositivas para facilitar la realización de talleres. ●

El detalle de la discusiones ocurridas en el trabajo en comisiones se halla en un segundo documento que se encuentra a disposición en www.resistalosagronegocios.info

Canjes de deuda por naturaleza

De la deuda ilegítima al “canje” perverso

A la deuda deshonrosa generada en América Latina por los gobiernos ilegítimos desde la creación de los organismos financieros internacionales –en la década de los sesenta– se agrega ahora un nuevo mecanismo perverso: el canje de deuda externa por naturaleza. Un nuevo recurso del capital transnacional para aumentar su control sobre los países pobres. Si bien este mecanismo ha sido puesto en marcha por Estados Unidos en una decena de países, los casos de Paraguay y Colombia son bien ilustrativos del papel que juegan en estos procesos las grandes “transnacionales” de la conservación.

Biodiversidad
José Elosegui



Los programas de “canje de deuda por naturaleza” se tratan, a simple vista, de un acuerdo entre el gobierno estadounidense y un gobierno de un país pobre deudor, mediante el cual Estados Unidos exonera del pago de una parte de la deuda externa a ese estado.

En contrapartida, el país deudor debe invertir una determinada cantidad de dinero que Estados Unidos le otorga para implementar proyectos de conservación de su medio ambiente.

Parece un cuento de hadas: Estados Unidos se transforma en un estado protector y salvador de la Madre Naturaleza a nivel mundial, que al mismo tiempo libra a los países más pobres de tener que pagar su deuda externa.

Con una mirada un poco más profunda se descubre un complejo entramado de relaciones que echa por la borda la historia del “Hermano Mayor”.

Bajo la excusa del cuidado del medio ambiente, el gobierno estadounidense, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) de ese país, entre otros actores, despliegan una brutal estrategia de apoderamiento de los recursos naturales de los países no desarrollados.

Así, los canjes de deuda por naturaleza se transforman en una herramienta más al servicio de Estados Unidos y del capital transnacional para extender su poderío a escala planetaria.

El mecanismo

Los “canjes de deuda por naturaleza” fueron creados a mediados de la década de los ochenta y en los últimos años aumentaron los acuerdos de este tipo alcanzados por Estados Unidos.

Ese país ya firmó este tipo de convenios con naciones como Bangladesh, Belice, El Salvador, Filipinas, Panamá, Perú, Colombia y Paraguay.

La estructura general de estos acuerdos sigue, a grandes rasgos, la lógica siguiente. A modo de ejemplo: el gobierno de Estados Unidos otorga a un país deudor nueve millones de dólares, monto que le descontará además de su deuda externa.

Grandes ONG conservacionistas también otorgan fondos al estado deudor. Las estadounidenses Nature Conservancy, Conservation International y World Wildlife Fund, consideradas como grandes transnacionales de la conservación, figuran en varios de estos acuerdos.

El país “beneficiario” se compromete a utilizar durante determinado tiempo el dinero que recibe en la implementación de proyectos de conservación de sus bosques tropicales, dirigidos por ONG locales que deben ser reconocidas por Estados Unidos.

Este tipo de acuerdos son posibles bajo las disposiciones de la Ley de Conservación de Bosques Tropicales (TFCA, por su sigla en inglés), promulgada en Estados Unidos en 1998. Esa norma regula la utilización por parte del gobierno estadounidense de fondos presupuestales para financiar proyectos de conservación en diversas partes del mundo.

Según la Embajada estadounidense en Colombia, la TFCA fue creada para “proporcionar una oportunidad, a los países en vías de desarrollo que califiquen, de reducir su deuda con Estados Unidos, al tiempo que generan financiación para actividades que ayuden a conservar sus importantes áreas de bosques tropicales”¹.

Por otra parte, la USAID también está involucrada en la firma de estos acuerdos.

Paraguay: el caso más reciente

El gobierno paraguayo, presidido por Nicanor Duarte, firmó en junio un acuerdo de canje de deuda por naturaleza con el de Estados Unidos, que encabeza George Bush, por una suma que supera los siete millones de dólares. El acuerdo todavía debe ser aprobado por el Congreso paraguayo.

Según información brindada por el Ministerio de Hacienda de Paraguay, el acuerdo, en el que participa la USAID y siempre en el marco de la TFCA, es el primer canje de deuda que firma ese país².

Paraguay se comprometió, prosigue el Ministerio de Hacienda, a “generar fondos en moneda local para utilizar en la conservación de bosques tropicales en Paraguay”³, tarea que llevarán adelante ONG locales.

El ministro de Ambiente paraguayo, Alfredo Molinas, fue más enfático todavía. Según el diario paraguayo ABC Color, el jerarca dijo que el dinero que su país recibe de Estados Unidos “está atado” a proyectos del bosque tropical del Alto Paraná. Molinas subrayó que el acuerdo con Estados Unidos constituye un “hito histórico” en el proceso de reducción de la deuda externa de Paraguay.

Varias organizaciones y congresistas opositores al gobierno de Duarte manifestaron su disconformidad por la poca información y la ausencia de discusión pública sobre el canje que se firmó con Estados Unidos.

Organizaciones no gubernamentales pidieron incluso aplazar la firma del convenio, para impulsar antes una discusión nacional sobre sus riesgos y beneficios en seminarios, debates y foros.

Una mirada un poco más profunda: Colombia

Según información brindada por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, esos dos países acordaron en abril de 2004 un canje de deuda por naturaleza por unos diez millones de dólares⁴.

Por su parte, el gobierno colombiano, que preside Álvaro Uribe, se comprometió a utilizar los fondos en la implementación de proyectos locales de conservación, con el objetivo de proteger importantes áreas de bosques tropicales.

Para llevar a cabo este canje de deuda por naturaleza, el gobierno de Estados Unidos cedió a Colombia 7 millones de dólares de asignaciones bajo la TFCA.

Las ONG Nature Conservancy, Conservation International y World Wildlife Fund contribuyeron con 1,4 millones de dólares.

Las áreas de Colombia que se beneficiarían por la firma de este acuerdo son los bosques del noreste de los Andes tropicales, la región del río Orinoco en los Llanos Orientales y el Caribe. Estas zonas son inmensamente ricas en fauna y flora.

Según Hildebrando Vélez, integrante de la organización ambientalista Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, la TFCA exige que en el país que recibe los fondos se establezca un administrador que los maneje, que tenga la confianza de Estados Unidos⁵. Vélez explica que en el caso colombiano el administrador es el Fondo para la Acción Ambiental, fundación sin fines de lucro constituida en el año 2000.

Esa institución es la encargada de ceder los fondos para financiar proyectos de ONG colombianas, dispuestas a trabajar en la conservación de los bosques tropicales en las áreas seleccionadas.

Las consecuencias

En realidad lo que se logra con los programas de canje de deuda por naturaleza es entregar a Estados Unidos y a Nature Conservancy, Conservation International y World Wildlife Fund, el poder de decisión sobre los recursos naturales de un país.

El país deudor, que supuestamente es el “beneficiario” del canje, en realidad pierde posibilidades de decidir sobre el manejo de sus propios recursos, facultad que cede al gobierno estadounidense, a las empresas



privadas asociadas a él y a las grandes transnacionales de la conservación.

Por lo general, están de por medio las regiones más ricas y abundantes en recursos de la nación deudora. Ese país no solo depende, con estos canjes, de decisiones foráneas para manejar sus recursos, sino que además queda expuesto al ingreso a su territorio de grandes empresas privadas que se dediquen a brindar servicios ambientales, entre otros.

En El Salvador quedó bajo “protección” un bosque nublado único en ese país, donde proliferan orquídeas y raros ejemplares de monos araña, pumas y búhos rayados.

En Belice, el canje le costó al estado la entrega de un segmento del Corredor Montañoso Marino Maya, que abarca un pedazo de costas en el Caribe.

En el caso de Perú, el acuerdo con Estados Unidos incluyó el Santuario Histórico de Machu Picchu y la denominada Reserva Natural de Pacaya-Samiria, así como bosques tropicales de la selva amazónica.

El ambientalista Hildebrando Vélez realiza una crítica de los proyectos de conservación locales que se implementan en el marco del cumplimiento de estos programas de canjes de deuda por naturaleza.

Explica que esos proyectos “estarían orientados a que actores particulares realicen tareas que son responsabilidad del Estado, debilitando al mismo y transfiriendo sus funciones a actores privados”⁶.

Esos emprendimientos también buscarían “asegurar la conservación biológica con el propósito de tener una disponibilidad futura de recursos para proveer servicios ambientales privatizados”⁷, agrega Vélez.

Los servicios ambientales (como el ecoturismo) responden a una lógica de mercantilización de la naturaleza, según la cual los recursos naturales tienen un valor económico y por tanto pueden ser vendidos.

Vélez explica además que esos servicios son prestados por grandes corporaciones transnacionales o sus subsidiarias nacionales.

Es dable esperar que esas empresas no respeten los derechos de las comunidades locales que habitan las zonas donde ellas operan. Esas comunidades corren el riesgo de perder sus territorios y sus recursos naturales por la firma de acuerdos en los que participó el propio gobierno de su país.

Vélez va más allá en su crítica de los proyectos de conservación pactados en el marco de los canjes de deuda por naturaleza. Considera que servirían también para mitigar los impactos medioambientales de los megaproyectos que se realicen en el marco de la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

Lo que parece preocupar al ambientalista colombiano es que mediante esas acciones de mitigación de impactos ambientales, que en principio siempre son bienvenidas, se puedan encubrir los graves efectos del IIRSA en la región.

De esta forma, los canjes de deuda por naturaleza son un complejo mecanismo político y financiero destinado a asegurar al gobierno de Estados Unidos y a las grandes “transnacionales de la conservación” el derecho de apoderarse de los recursos naturales de los países más pobres y dependientes.

El manejo de esos recursos permite además a Estados Unidos satisfacer una de las demandas más importantes del sistema capitalista y neoliberal que promueve, que es la promoción de la participación de empresas transnacionales que se dediquen, entre otros rubros, a la gestión de los recursos y a la venta de servicios ambientales.

En este sentido, resultan bastante claros los procesos de apropiación y privatización del agua en países ricos en ese recurso, principalmente en América Latina. ●

Notas

- 1 “Acuerdo de canje de deuda por naturaleza para Colombia”. Embajada de los Estados Unidos de América. Bogotá, Colombia. 23 de abril de 2004. Ver en: <http://bogota.usembassy.gov>
- 2 “El Gobierno firmó convenio para canjear deuda por naturaleza con Estados Unidos”. Ministerio de Hacienda, República del Paraguay. 7 de junio de 2006. Ver en: <http://www.hacienda.gov.py>
- 3 Ídem.
- 4 “Acuerdo de canje de deuda por naturaleza para Colombia”. Embajada de los Estados Unidos de América. Bogotá, Colombia. 23 de abril de 2004. Ver en: <http://bogota.usembassy.gov>
- 5 “Canjes de deuda por naturaleza”. Hildebrando Vélez. Revista Biodiversidad, número 42. Octubre de 2004.
- 6 Ídem.
- 7 Ídem.

Carmen Améndola, presente

Hay personas que pasan por nuestras vidas dejando toneladas de cosas buenas: compromiso inquebrantable con el cambio hacia un mundo mejor, unidad en la multiplicidad de los haceres, y sonrisas a manos llenas. Aunque no soy de los que más la conocimos, me considero privilegiado por la calidad de los momentos compartidos con Carmen Améndola, la compañera editora de la Revista Biodiversidad, recientemente fallecida. Durante casi 10 años trabajamos en la revista, en reuniones y seminarios en Uruguay y en viajes a varios países de esta América nuestra.

Eso sí, a Carmen tuve el privilegio de conocerla en muchas de sus facetas: militante social, investigadora, profesora universitaria, editora, agrónoma y socióloga, eterna estudiante, madre, esposa de su querido Beto, uruguayo. Y en todos esos *haceres* y *estares* de la vida nunca la faltó el compromiso, ese compromiso que distingue a aquellos que desde la humildad, con un estilo que puede pasar desapercibido, siempre dan un poquito más que los demás. A veces quizás hasta un poquito más allá de las fuerzas físicas, ese compromiso que a esos seres especiales parece que les sale del alma.

Carmen siempre me quiso hacer creer que aprendía mucho conmigo. Fue su manera de ser, dándole *p'arriba* a la gente, rápida en subrayar lo positivo. En la crítica necesaria, cuidadosa y certera. A los que fueron sus estudiantes tiene que haberles llamado la atención cómo se puede ser intelectualmente brillante sin caer en la arrogancia. Siempre he admirado a quienes, como Carmen, acometen con el mismo entusiasmo la coordinación de un evento universitario con invitados internacionales, como la corrección cuidadosa de una carta enviada para su publicación por una organización campesina. Creo que lo hice antes, pero de todas maneras aprovecho para decirlo ahora: Carmen, no sabes lo mucho que aprendí con vos.

Sé que somos muchas y muchos los que podríamos aportar con anécdotas sobre Carmen, y los invitamos



a que manden una notita a la Revista con ellas. A mí me gustaría cerrar recordando a Carmen una mañana en la plaza de la ciudad de Cochabamba, cuando por azar fuimos testigos de un cabildo abierto donde miles de bolivianos discutían los pasos a seguir en la lucha por el agua. En algún momento miré a Carmen, que estaba a unos metros de distancia, y pude ver en su cara una sonrisa que traslucía el optimismo de que sí, otro mundo es posible.

Nelson Alvarez Febles
septiembre 2006

Pan, Paz, Tierra y Libertad - ECOVIDA 2006

Manizales-Colombia

13,14 y 15 de octubre 2006

Cuatro palabras abren este escrito retomadas desde la campaña global para la reforma agraria impulsada por Vía Campesina, en las que están inmersas las múltiples intenciones que día a día se tejen en el proyecto de rescate de la sabiduría popular y la producción limpia en Latinoamérica, donde no solo se reclama el hecho de la tierra, sino de las condiciones mínimas que el campo debe portar como escenario de cosecha de vida y no de muerte como lo han teñido los diferentes actores del conflicto social; estas cuatro palabras resumen nuestro interés en ECOVIDA, inscriben en el cielo azul el empeño con el que trabajamos pero sobre todo el amor con el que escribimos estas palabras y con el cual estamos haciendo este proceso, seguimos trabajando en la construcción de la soberanía y dignidad, seguimos talariando la canción de la esperanza.

Para este IV ENCUENTRO DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS Y SABIDURÍAS POPULARES ECOVIDA 2006, en un trabajo de análisis y discusión trataremos en el contexto del evento los siguientes temas en aras de posibilitar el intercambio de palabra y de experiencia frente a ellos:

- Soberanía alimentaria, comercio local y sistemas alternativos de certificación.
- Transgénicos, campaña nacional sobre diversidad biológica y cultural y soberanía alimentaria
- Agroecología, educación rural y desarrollo humano con énfasis en la infancia rural en Colombia
- Organización comunitaria
- Comercio Justo

Durante el evento cada organización esta invitada a presentar las diferentes actividades, programas y procesos llevados a cabo a nivel local y regional por cada una y todos los aportes que a su vez puedan sumar en la estructuración del mismo, además se sugiere que como aporte al evento compartan alguna receta utilizada con alguna especie promisorio de cada región de tal manera que compartamos nuestro gusto gastronómicos o medicinales.

CONSULTAS E INFORMACIÓN: Para mayor información relacionada con la presente circular pueden comunicarse a:

Jardín Botánico Universidad de Caldas

Calle 65 # 26-10- Manizales

Teléfono: (6) 8 86 12 50 ext. 408, Celular: 315 8479584

Correos electrónicos: ecovida2006@colombia.com, josegallego@ucaldas.edu.co

III Encuentro de Agroecología y Soberanía Alimentaria

Parque Ecológico Municipal los días 6 y 7 de Octubre del presente año. Camino Centenario y San Luis - Villa Elisa. Partido de La Plata

Organizado por: Centro Educativo Agroecológico- CEA (Parque Ecológico Municipal), el Programa Pro-Huerta del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar- IPAF Pampeana-INTA y el Programa Argentina Sustentable - PAS.

Los objetivos del evento son los siguientes:

- Generar un espacio de reflexión sobre la problemática agroalimentaria.
- Compartir y conocer experiencias productivas y de investigación, entre productores, organizaciones sociales, estudiantes, investigadores basadas en un enfoque agroecológico.
- Valorizar los saberes sobre la autoproducción de alimento y la estrecha relación con la diversidad biológica.
- Promover el desarrollo y apropiación de tecnologías apropiadas para la agricultura familiar.
- Poner en común el conjunto de ideas o conocimientos sobre la agroecología y soberanía alimentaria y

colectivamente llegar a comunes acuerdos respecto de estrategias para el desarrollo local.

Dentro de las disertaciones, muestras activas, talleres y ferias del encuentro se desarrollaran los siguientes ejes temáticos:

- Desarrollo rural, sustentabilidad y soberanía alimentaria.
- Agroecología, diálogo de saberes y revalorización de la biodiversidad
- Enfoque agroecológico del productor al consumidor.
- Economía social, comercio justo y soberanía alimentaria
- Manejo ecológico de sistemas de producción.
- Muestra activa de maquinarias y herramientas
- Taller: La Huerta Orgánica.
- Muestra y ferias de semillas y productos
- Taller de cierre: Construyendo estrategias para alcanzar la soberanía alimentaria y promover el desarrollo Local.

Contacto: Stella Maris Mangione, ceashpa@yahoo.com.ar

Taller MABI

26, 27 y 28 de octubre en Chapadmalal, Mar del Plata, Argentina, en el marco del Segundo Congreso de Educación Ambiental organizado, entre otros, por el gremio de docentes argentino CTERA.

Taller que tiene como objetivo analizar los monopolios de patentes y copyrights y las restricciones técnicas impuestas sobre el conocimiento y la vida, desde la perspectiva de Biopolítica que venimos trabajando ya desde el Libro “¿Un mundo patentado?”.

Algunos temas a desarrollar:

- El régimen de patentes, qué es, hasta dónde llega y cómo impacta en nuestras vidas
- El derecho de autor y el acceso a la cultura
- Regulaciones técnicas inapelables. / Umbrales irreversibles
- Estrategias de construcción y resistencia
- Convergencia de movimientos: acuerdos, desacuerdos y alianzas posibles

Organiza: Fundación Vía Libre, Fundación Heinrich Boell y el Proyecto Cono Sur Sustentable

Contacto: Beatriz Busaniche, bea@vialibre.org.ar

“El Modelo de Desarrollo Irresponsable, Insustentable y Antidemocrático en el Paraguay actual”

Agosto, 2006, Asunción, Paraguay

El Modelo de Desarrollo Irresponsable, Insustentable y Antidemocrático en el Paraguay actual se titula la declaración que organizaciones paraguayas e internacionales de distintos sectores lanzaron para manifestar su oposición a la producción de soja a gran escala, por considerar que la misma responde claramente a un modelo agroindustrial antidemocrático, excluyente, irresponsable, egoísta y concentrador de beneficios.

El documento está firmado por la MCNOC (Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas), la FNC (Federación Nacional Campesina), la ONAC (Organización Nacional Campesina), la CNOCIP (Central Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Populares), la CONAMURI (Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas), las organizaciones BASE IS, SOBREVIVENCIA-Amigos de la Tierra Paraguay, todas de Paraguay; las organizaciones internacionales GFC (Coalición Mundial por los Bosques, Global Forest Coalition) y A SEED Europa, y sigue siendo suscripta por otras.

El mismo manifiesta el rechazo de estas organizaciones al modelo económico exportador de materia prima de los monocultivos de soja, basado en el uso masivo de biocidas y tóxicos y en la introducción del peligro de los transgénicos, y el repudio a la realización en el Paraguay de la Segunda Mesa Redonda de Soja Responsable, iniciativa impulsada por corporaciones multinacionales y fundaciones conservacionistas.

Para más información contactar con:

Julia Franco - CONAMURI

Tel. (595 21) 490 203
Cel. (595 971) 322 100
conamuri@rieder.net.py

Beatriz Silvero - SOBREVIVENCIA, Amigos de la Tierra Paraguay

Tel. (595 21) 480 182
Cel. (595 981) 921 850
ecolegal@sobrevivencia.org.py

An Maeyens - A SEED Europa

Tel. (595 21) 451 217
Cel. (595 981) 893 511
an@aseed.net

Mirna Mochet

Cel. (595 981) 881 442
onac@telesurf.com.py

Marcial Gómez - FNC

Tel. (595 21) 512 384
Cel. (595 971) 984 413
fncparaguay@gmail.com

Tomás Palau - BASE IS

Tel. (595 21) 451 217
tpalau@baseis.org.py

Miguel Lovera - GFC

Cel. (595 971) 201 957
lovera2@conexion.com.py

Proyecto maestro de contaminación del maíz

Aprovechando el caos político en México, las empresas transnacionales de transgénicos, junto a varios investigadores y autoridades mexicanas, intentan, otra vez, que se apruebe la experimentación con maíz transgénico en el país, paso indispensable para luego aprobar la siembra comercial a gran escala.

Todo indica que las autoridades salientes involucradas creen que no tendrán que dar cuentas al público, y quieren aprovechar para hacerle el favor a las compañías de autorizar la siembra de maíz transgénico en el centro de origen del cultivo, contra la lógica, contra el conocimiento, contra los intereses de México, contra la voluntad popular de la aplastante mayoría de los mexicanos y, además, contra la ley.

Por tercera vez, usando el privilegio de apelación que le concede a las empresas la ley Monsanto (ley de bioseguridad), las empresas Monsanto, Dow y Pioneer (Dupont) vuelven a insistir con siete solicitudes de experimentación de maíz transgénico en campos del INIFAP en Sinaloa y Tamaulipas.

Desde que comenzó el proceso de estas solicitudes en el año reciente, las empresas, algunos agricultores industriales posiblemente pagados por ellas y las autoridades se refieren a un tal Proyecto maestro de maíz, elaborado por unos pocos investigadores mexicanos con las empresas, que permitiría analizar "seriamente" las ventajas o problemas que tendría la siembra de maíz transgénico en México. Con leves variacio-

nes, han afirmado que estas experiencias darían respuesta "científica" a las interrogantes y cuestionamientos que han hecho ambientalistas y campesinos, entre muchos otros, sobre los riesgos de plantar maíz transgénico en México.

Las solicitudes y el Proyecto maestro anexo, sólo se refieren a medidas de seguridad durante la experimentación. Discutibles, por cierto. Por ejemplo, en varios trabajos científicos se considera que el polen de maíz se puede dispersar a distancias mucho mayores de 300 metros. Pero esa discusión nos desviaría del tema fundamental ahora: claramente, en los documentos a consideración, el objetivo no es la investigación de los impactos del maíz transgénico -no estudiarán el flujo génico, ni los impactos en la biodiversidad y mucho menos los efectos de la contaminación que sí saben que existe en muchas partes de México; los aspectos sociales, culturales y económicos brillan por su ausencia- sino una micro-evaluación de rendimiento y efectividad, eliminando cualquier otra variable. Evaluación puramente formal, porque la parcela experimental es un espacio limitado, artificialmente controlado, en circunstancias que nunca se repetirán en la realidad. ¿O a poco los agricultores que optaran por plantar maíz transgénico van a tomar las mismas medidas para evitar la contaminación?

En base a ETC (www.etcgroup.org)

"De la indignidad a la indignación"

**Las verdades sobre las negociaciones del TLC
Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio y
el ALCA (RECALCA)**

La lucha contra el Tratado de Libre Comercio con EE.UU ha entrado en una nueva fase, desde el comienzo de las negociaciones, la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, ha hecho un seguimiento analítico del proceso de negociaciones y desafortunadamente todos nuestros vaticinios se han cumplido. Las decenas de pronunciamientos realizados en cada una de las fases del proceso así lo atestiguan. De la forma como se llevó a cabo el proceso era fácil deducir cuáles serían los resultados. En forma oportuna y pública, en foros y pronunciamientos, en actividades del movimiento popular paralelas a las rondas y entrevistas, escritos e investigaciones, hicimos un seguimiento del proceso. Hemos recopilado las declaraciones de la Red no como simple testimonio, sino como herramienta educativa para lo que consideramos la lucha que ha de proseguir. Hemos cursado la fase preparatoria y comenzamos una nueva etapa. El TLC dista mucho de ser un hecho cumplido y faltan muchos meses para que la suerte esté definida. El gobierno

negoció en secreto y argumentaba que defendería el interés nacional. Hoy los hechos y los textos demuestran que no fue así. Ya el debate no es sobre conjeturas sino sobre realidades. La publicación de los principales documentos de este período preliminar debe contribuir a animar los pasos que siguen. El mensaje es claro: análisis oportunos y sustentados, confianza en la capacidad del pueblo de entender el problema, espíritu unitario, rigor y certeza sobre que este proyecto recolonizador puede detenerse.

Informes sobre RECALCA:

Internet: www.recalca.etb.net.co

ILSA: Calle 38 No. 16-45

Tels: 288 04 16 – 288 36 78

CEDETRABAJO: Cra. 23 No. 40-12 – 2° piso

Tels: 244 35 16 -268 66 86

CORREO ELECTRÓNICO:

recalca@etb.net.co

Dibujos: Orlando Martínez

Diseño y Carátula: Jorge E. Espinosa C.

Preprensa e Impresión: Servigraphic Ltda.

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

"Liberemos la Diversidad"

Derechos de los campesinos y semillas:

los desafíos en Europa.

Reporte del seminario Europeo sobre semillas.

Poitiers, Francia, noviembre del 2005

En junio de 1989, mientras los campesinos franceses recogían sus cereales, se enteran de que un nuevo Reglamento (oficializado el 4 del mismo mes) les prohíbe hacer su semilla desde parte de su cosecha. No podrán elegir más, ya que se verán obligados a comprar las semillas a las empresas que son dos veces más caras. Los empresarios denominados "recolectores" que utilizan las máquinas trilladoras, son prestadores de servicios. Con un material ambulante pasan por las fincas para limpiar y cribar las semillas destinadas a la siembra. Y de noche a la mañana se les dice que su actividad está prohibida. Esta decisión ha sido tomada por muchos como un ataque a la libertad. Un mes después, se reunieron mil campesinos y recolectores delante de la Prefectura de Poitiers y decidieron públicamente seguir con su trabajo de preparación de las semillas en las fincas de forma ilegal. La CNDSF (Coordinación Nacional para la Defensa de las Semillas en las Fincas) que agrupa a tres sindicatos agrícolas (Confederación Campesina, Coordinación Rural y MODEF), junto al sindicato de recolectores y las organizaciones de agricultura ecológica, nació desde ese evento. Desde entonces, se ha

luchado contra las tentativas constantes de las empresas para impedir a los campesinos hacer sus propias semillas. En noviembre del año 2005 la CNDSF organizó este Seminario del que en esta publicación se exponen las principales propuestas surgidas de los talleres allí realizados.

Seminario organizado por:

CNDSF:

Coordinación Nacional para la defensa de las semillas de "granja"

Contacto: Zone industrielle – BP 37

16700 RUFFEC

Tel: +33 (0) 5 45 31 29 26

semences-ferm@infonie.fr

RSP:

Réseau Semences Paysannes

Contact: Cazalens

81600 BRENS

Tel: +33(0) 5 63 41 72 86

contac@semencespaysannes.org

<http://www.ssemencespaysannes.org>

Realización: BEDE et RSP international

Contacto: 47, place du Millénaire

34000 Montpellier

Tel./ Fax + 33 (0) 4 67 65 45 12

www.bede-asso.org

"Agroecologia"

A organização camponesa reconstruindo o sustento da vida e a transformação da sociedade.

Este manual fue preparado para el 5º Encuentro Estadual de Agroecología realizado en Paraná, Brasil en el Centro de Convenciones de Cascabel del 7 al 10 de junio del 2006.

Como introducción los autores presnetan la Carta de la 4ª Jornada en la que los 6000 participantes plantearon: "Nós, 6.000 participantes do 4º Encontro da Jornada de Agroecologia, reunidos em Cascavel - Paraná - Brasil reafirmamos nosso compromisso com a Agroecologia, continuando nossa luta por uma Terra Livre de Transgênicos e sem Agrotóxicos e conquistando a implementação de um Projeto Popular Soberano para a Agricultura Camponesa e Familiar, fundamentado na Agroecologia".

Autores:

Adriano da Costa Valadão, Mestre em Ciências Sociais Aplicadas, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Carlos Neudi Finkler, Setor de Produção, Cooperação e Meio Ambiente - Setor de Produção Cooperação e Meio Ambiente - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Cassemiro Chebinski, Engenheiro Agrônomo, Setor de Produção, Cooperação e Meio Ambiente - Setor de Produção Cooperação e Meio Ambiente - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Cinara Fátima Benetti Pinto, Médica Veterinária, Setor de Produção Cooperação e Meio Ambiente - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;

José Maria Tardin, Técnico Agropecuario, Setor de Produção Cooperação e Meio Ambiente - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;

Priscila Facina Monnerat, Engenheira Florestal, Setor de Produção Cooperação e Meio Ambiente - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra;

Silvana dos Santos Moreira, Engenheira Agrônoma, Setor de Produção Cooperação e Meio Ambiente - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Lílian Garcia Faria, Zootecnista, Setor de Produção, Cooperação e Meio Ambiente - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Site: www.jornadadeagroecologia.com.br

E-mail: secretaria@jornadadeagroecologia.com.br